

This is the **published version** of the bachelor thesis:

Espada López, Ana Vanessa; Lladó, Ramón, dir. Traducción jurada y jurídica : la traducción en España en 2013: un panorama multilingüe. 2015. (868 Traducció i Interpretació)

This version is available at <https://ddd.uab.cat/record/146975>

under the terms of the  **IN**
COPYRIGHT license

TRADUCCIÓN JURADA Y JURÍDICA: LA TRADUCCIÓN EN ESPAÑA EN 2013: UN PANORAMA MULTILINGÜE

101486 - Trabajo de Fin de Grado

Grado en Traducción e Interpretación
Curso académico 2014-15

Estudiante: Ana Vanessa Espada López

Tutor: Ramón Lladó

14 de Junio del 2015

Facultad de Traducción e Interpretación

Universidad Autónoma de Barcelona

Datos del TFG

Título: La traducción en España en 2013: Un panorama multilingüe

Autor: Ana Vanessa Espada López

Tutor: Ramón Lladó

Centro: Facultad de Traducción e Interpretación

Estudios: Grado en Traducción e Interpretación

Curso académico: 2014-15

Palabras clave

Traducción, jurada, jurídica, interpretación, 2013, panorama de la traducción, pluralidad lingüística.

Translation, sworn, legal, interpretation, 2013, translation outlook, linguistic diversity.

Resumen del TFG

Este trabajo pretende dar una visión global tanto de la traducción jurada como de la jurídica de forma clara y concisa. Además, enmarcamos el plano legal bajo el que están sujetas estas dos disciplinas para poder vislumbrar posibles fallas que dificultan el correcto desarrollo de la actividad profesional a nivel autonómico, estatal como europeo.

This study tries to provide a global overview not only of the sworn translation but also of legal translation clearly and concisely. Furthermore, these disciplines under the legal terms which we will frame to discern possible faults and hinder the proper development of professional activity at regional, national and European levels.

Aviso Legal

© Ana Vanessa Espada López, Barcelona, 2015. Todos los derechos reservados.

Ningún contenido de este trabajo puede ser objeto de reproducción, comunicación pública, difusión y/o transformación, de forma parcial o total, sin el permiso o la autorización de su autor/a.

Índice

PREÁMBULO.....	3
1. SOCIOLOGÍA DE LA TRADUCCIÓN.....	3
2. PANORAMA DE LA TRADUCCIÓN JURÍDICA.....	5
3. PANORAMA DE LA TRADUCCIÓN JURADA	5
<i>a. España: Marco Legal.....</i>	<i>6</i>
i. Cataluña	7
ii. País Vasco	10
iii. Galicia.....	10
<i>b. Principales modificaciones de la normativa</i>	<i>12</i>
4. LA INTERPRETACIÓN JURADA.....	13
<i>a. El caso de la formación y habilitación de los Licenciados en Traducción e Interpretación como intérpretes jurados</i>	<i>13</i>
5. DESARROLLO DE LA TRADUCCIÓN JURADA/ JURÍDICA EN EL MUNDO PROFESIONAL.....	16
<i>a. Regulación en el mundo profesional</i>	<i>17</i>
<i>b. Vacío legal</i>	<i>17</i>
6. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS: PLURALIDAD LINGÜÍSTICA.....	18
7. LA TRADUCCIÓN JURADA EN CIFRAS.....	20
8. LA TRADUCCIÓN JURADA Y JURÍDICA EN EL MARCO EUROPEO	22
9. CONCLUSIONES.....	24
10. DIRECCIONES ÚTILES	25
11. BIBLIOGRAFIA	26
ANEXOS.....	I
I. DECRETOS.....	III
<i>Anexo 1. Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto</i>	<i>III</i>

<i>Anexo 2. ORDEN AEX/1971/2002, de 12 de julio, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para la obtención del nombramiento de Intérprete Jurado por los Licenciados en Traducción e Interpretación.</i>	VII
<i>Anexo 3. Nombramiento de traductor/a o intérprete jurado/a al catalán (ORDRE CLT/101/2003, de 26 de febrer, sobre l'adaptació del procediment de sol·licitud de nomenament de traductor/a o intèrpret jurat/ada al català i del català a altres llengües a la realització per sistemes telemàtics)</i>	XI
<i>Anexo 4. Ley [CATALUÑA] 1/2015, 5 febrero, Distribución de competencias en relación con el occitano</i>	XIV
<i>Anexo 5. Decreto 267/2002, de 13 de junio, La habilitación profesional para la traducción y la interpretación jurada de otras lenguas al gallego, y viceversa</i>	XVI
<i>Anexo 6. Transposición de la Directiva Europea 2010/64</i>	XXVII
<i>Anexo 7. Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, por la que se dictan normas sobre los exámenes para la obtención del título de Traductor-Intérprete Jurado.</i>	XXXIII
<i>Anexo 8. Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se desarrolla el artículo 15.2 del Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas</i>	XLI
II. RED VÉRTICE	XLIV
<i>Anexo 1. Carta de Red Vértice al Ministerio de Justicia: Hacia un nuevo modelo de gestión de la traducción y la interpretación judicial</i>	XLIV
<i>Anexo 2. Comunicado APTIJ-Vértice (07/07/14)</i>	XLIX
<i>Anexo 3. Red Vértice se reúne con los ponentes del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal</i>	LI
<i>Anexo 4. Modelo carta diputados_18.09.14</i>	LII
<i>Anexo 5. Comunicado de Red Vértice el 23/10/13</i>	LVI
AUTORITZACIÓ PER A LA DIFUSIÓ D'UN DOCUMENT ALS DIPÒSITS DIGITALS DE LA UAB I DEL CBUC	LVIII

PREÁMBULO

Este preámbulo tiene como objetivo hacer un estudio pormenorizado del panorama de la traducción, así como de los distintos matices que se deben considerar en el campo de la interpretación, tanto jurídica como jurada.

Primero abordaremos la teoría de la traducción contextualizada socialmente, o lo que es lo mismo, la sociología de la traducción.

En segundo lugar, definiremos en profundidad las diferencias que existen entre los dos tipos de traducción (la jurídica y la jurada u oficial) así como la situación actual de cada una de ellas, y más detalladamente, en las comunidades autónomas donde existe bilingüismo y las problemáticas que puedan acontecer a la hora de la formación, habilitación o ejercicio de la figura del traductor-interprete jurado.

La figura del intérprete jurado la trataremos en otro apartado debido a su complejidad y las recientes modificaciones que afectan a su regulación.

En tercer lugar, analizaremos la situación profesional tanto de los traductores jurídicos como los traductores jurados y, el desamparo legal bajo el cual se encuentran dentro del marco profesional español en el panorama multilingüe vigente.

1. SOCIOLOGÍA DE LA TRADUCCIÓN

En este trabajo, mis objetivos se centran en analizar algunas dificultades con las que se encuentran los traductores jurados al desarrollar su trabajo, a la luz del principio de relevancia social. Estamos ante un terreno que ha interesado a muchos investigadores, hasta el punto de que la traducción en el ámbito jurídico (tanto en el plano escrito como en el oral) ha sido la rama más productiva de la lingüística forense.

Partiendo de la definición de traducción como la *actividad comunicativa*, tanto escrita como oral, llevada a cabo por un mediador, y la sociología como la transposición en el texto de matices interculturales, lingüísticos, pragmáticos y de diversas índoles, podemos decir que la práctica de la traducción no es una tarea nada fácil.

En el momento en que lo comunicativo se une al texto, confluyen una serie de matices que conforman todo el mapa conceptual, y que almacenan una historia, en el caso de la traducción jurada/jurídica, la historia de la casuística legal.

A nivel traductológico, es necesario investigar en la traducción jurídica/jurada para una buena consolidación de la disciplina, ya que además, no tendría sentido basarse solamente en la historia de lo legal cuando las leyes están siendo

continuamente modificadas y, así construir, poco a poco, un corpus de trabajos teóricos y empíricos para poder consolidar la disciplina.

En el plano puramente sociológico en relación al ámbito profesional, seguimos necesitando herramientas como diccionarios, modelos de traducciones, documentación adaptada a las necesidades de los traductores, obras didácticas, sistemas de control de calidad, entre otros, como guía para el trabajo traductológico. Un tema preocupante es la inexistente falta de coherencia y una falta de criterios comunes de actuación profesional y formación (títulos o certificados de habilitación profesional de carácter internacional), lo que genera desunión y desconfianza hacia la figura de este tipo de traducción.

No solo nos podemos centrar en el plano sociológico o traductológico más superficial sino que también hay que hacer un estudio pormenorizado de las sociologías que confluyen en cada disciplina que afecta al proceso traductológico: la sociología de la traductología, sociología de la lingüística, etc...

Respecto a la literatura de los estudios sobre traducción, encontramos una amplia tradición de trabajos sobre lenguaje legal escritos en español. Destacan los estudios de historia de la lengua sobre textos anteriores al siglo XIX y las investigaciones que se decantan por describir las características de los documentos legales y administrativos. Sin embargo, la situación se vuelve menos alentadora al observar la producción científica existente sobre traducción aplicada a contextos legales, aunque es cierto que en los últimos años este panorama está cambiando. En la tesis doctoral defendida por Giambruno¹ trata la figura del rol del intérprete en España, utilizando para ello un corpus tanto oral como escrito, en el cual analiza las características del lenguaje jurídico, distinguiendo entre los niveles léxico, sintáctico, discursivo, pragmático y pragmático-lingüístico.

Si bien es cierto, la tradición de la traducción jurídica es más famosa en los países anglosajones que no en España. Según Anabel Borja (2000), este hecho es debido a como el comercio internacional ha dado lugar a gran número de figuras jurídicas, ya que implica la firma de contratos de compraventa, de transporte, de seguros, de representación comercial etc.

Si bien es cierto que la traducción jurada y jurídica se encuentra en una situación de auténtica y creciente necesidad, también es de vital necesidad un estudio más en profundidad sobre la materia para establecer unos protocolos que velen por correcto ejercicio de dicha traducción.

¹ Tesis Doctoral de Cynthia Giambruno *Language mediation on the judicial system*, (Fuente: <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/3554>)

2. PANORAMA DE LA TRADUCCIÓN JURÍDICA

Entendemos como traducción jurídica, también llamada traducción legal u oficial, a la traducción de documentos de carácter legal, tanto públicos como privados. Generalmente son textos traducidos por expertos en Derecho por lo que, hay que tener especialmente cuidado con los conceptos jurídicos a emplear y que a menudo, con los que no estamos familiarizados. Por tanto, no sólo basta con dominar el idioma meta y ser un experto traductor sino que hay que tener un total conocimiento de toda la parafernalia jurídica, que puede llegar a ser extremadamente compleja.

Hay desacuerdos a la hora de establecer los parámetros para decidir quién puede ser traductor jurídico. Hay quien opina que tener una formación consolidada en el campo de la traducción con una especialización en traducción jurídica sería suficiente. Otros, en cambio, opinan que el único capacitado para llevar a cabo este tipo de cometido sería la figura de un abogado, capaz de traducir la ley de manera objetiva y correcta. Por lo tanto, en este caso, el traductor jurídico ideal vendría a ser, lo que en la Unión Europea catalogan como un híbrido entre un jurista y un lingüista.

3. PANORAMA DE LA TRADUCCIÓN JURADA

La necesidad de realizar este tipo de traducción surge a partir de las exigencias de determinadas autoridades (ministerios, juzgados, instituciones académicas) de consignar una copia fiel de un determinado documento original; o bien de la necesidad de avalar la información contenida en el texto original.

El traductor-intérprete jurado es aquél que ha obtenido el nombramiento otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, pudiendo ejercer así como tal; el traductor jurídico es aquella persona que forma parte de la plantilla del órgano judicial habiendo superado previamente unas oposiciones; y finalmente, el traductor jurado temporal es aquella persona que el juez designa como intérprete para un caso en concreto por no haber un traductor jurídico en plantilla o un intérprete jurado disponible. La función de estos traductores jurados temporales es limitada en el tiempo, concluye una vez finalizado el acto para el que hayan sido requeridos.

Los campos de acción tanto de la traducción jurídica como de la traducción jurada no están del todo delimitados, sin embargo, la traducción jurídica suele abarcar un campo más amplio que la traducción jurada que suele reducirse a documentos administrativos, académicos, sanitarios, jurídicos o económicos redactados en un registro culto. De cualquier modo, los documentos con los que el Intérprete Jurado trabaja en su día a día suelen ser, en su mayoría, de naturaleza jurídica, en parte debido al carácter de oficialidad que confiere a sus traducciones al consignar su firma y sello en ellas y, por otro lado, a la exigencia de las administraciones

públicas de que todo documento redactado en un idioma no oficial deba ir acompañado de su correspondiente traducción jurada al idioma reconocido como oficial por la institución en la que se vaya a presentar el documento.

Hasta ahora no existe una normativa obligatoria que regule las traducciones juradas en lo que a metodología respecta. Asimismo, la Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes (A.P.E.T.I.) publicó en 1992 un conjunto de normas transitorias para la traducción jurada, constituyendo así, la primera tentativa de normalización de la ejecución de las traducciones juradas. Aunque no llegaron a hacerse efectivas, estas normas se consideran bastante completas y recogen los aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar una traducción jurada.

a. España: Marco Legal

No existe en España mucha regulación en torno a la traducción jurada más allá del Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto², por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y su modificaciones; la Orden de 8 de febrero de 1996, por la que se dictan normas sobre los exámenes para el nombramiento de Interpretes Jurados; y la Orden AEX/1971/2002³, de 12 de julio, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para la obtención del nombramiento de Intérprete Jurado por los licenciados en Traducción e Interpretación.

La citada legislación ha sido modificada, entre otros motivos, por la adhesión de España a la Unión Europea en 1985, y por la creación de la Licenciatura de Traducción e Interpretación como título universitario en 1972 (EUTI por la UAB), que en los últimos años se ha transformado en Grado. Estos técnicos, los únicos profesionales facultados para realizar traducciones oficiales, son nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

A continuación, mostramos algunas de las funciones propias de la Oficina de Interpretación de Lenguas que me han parecido más relevantes para este trabajo:

- La traducción oficial al castellano de los Tratados y Convenios internacionales en que sea parte el Estado español, así como de otros textos redactados en lenguas extranjeras cuya publicación en castellano sea preceptiva en virtud del ordenamiento legal vigente.
- La traducción a otras lenguas extranjeras de los textos que el Estado español esté obligado a proporcionar a otros Estados en virtud de los compromisos contraídos en el ámbito del Derecho Internacional.

² Véase apartado de Anexos; I. Decretos, Anexo 1. Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores.

³ Véase apartado de Anexos; I. Decretos, Anexo 2. Requisitos y procedimientos para la obtención del nombramiento de Intérprete Jurado

- La traducción al castellano o a otras lenguas extranjeras de documentos de carácter diplomático, consular o administrativo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como de todos aquellos documentos que, emanando de los órganos superiores del Estado, afecten a sus relaciones exteriores y de los que deba quedar constancia oficial.
- El cotejo de las traducciones de Tratados, Convenios internacionales y otros textos redactados en lenguas extranjeras cuya publicación en castellano sea preceptiva en virtud del ordenamiento legal vigente.
- La interpretación en actos en que intervengan representantes de los órganos superiores de la Administración del Estado, tanto en territorio nacional como en el extranjero, cuando sea requerida para ello.
- La participación, en calidad de expertos lingüísticos en traducción y/o interpretación, en reuniones de Conferencias o Comisiones encargadas de la negociación de Tratados, Acuerdos y Convenios internacionales, tanto en territorio nacional como en el extranjero, y asistencia a otros Ministerios y órganos de la Administración del Estado en materia de traducción e interpretación.
- El cotejo, revisión o traducción, según proceda, de los documentos remitidos por las autoridades judiciales conforme a lo previsto en las normas procesales, cuando el Ministerio de Justicia no haya previsto otro cauce para la prestación de este servicio.

Una vez descritos los dos tipos de traducción, jurada y jurídica; a continuación, se analizarán la situación de la traducción/interpretación jurada en las diferentes comunidades autónomas donde existe situación de bilingüismo:

i. Cataluña

Las pruebas de habilitación para la traducción y la interpretación juradas tienen su origen en las gestiones que tuvieron lugar en 1983 en relación al traspaso de competencias entre el estado y las CC.AA. En ese mismo año, tanto los poderes públicos, entre ellos el gobierno de la Generalitat como el Parlamento de Cataluña; como en el ámbito profesional, desde la Asociación Profesional Catalana de Traductores e Intérpretes de Cataluña (A.P.T.I.C) y la Asociación Profesional de Traductores y Correctores en lengua catalana, pusieron sobre la mesa sus primeras iniciativas.

Sin embargo, del 1984 al 1992, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE), decidió incluir el catalán como una de las lenguas objeto de la traducción jurada al español. Pero en 1992, el MAE decidió no convocar más pruebas de catalán a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional de 1989 donde reconocía que la habilitación de intérpretes y traductores jurados de comunidades autónomas con lengua propia eran competencia exclusiva de la comunidad autónoma en cuestión. Debido a esta causa, y a otras muchas, la Generalitat de Cataluña decidió asumir la competencia en materia de traducción e interpretación juradas. Como

consecuencia, se aprueba el Decreto 87/1994⁴, del 19 de abril, sobre traducción e interpretación juradas de otras lenguas al catalán, el cual regula dos aspectos básicos: las pruebas necesarias para la habilitación profesional para la traducción e interpretación juradas al catalán y la creación de un registro de traductores e intérpretes jurados. Este decreto, se modificó por el 119/2000⁵, el 20 de marzo, que hace las siguientes modificaciones: el reconocimiento específico del carácter general de las traducciones e interpretaciones, la regulación de la traducción y la interpretación de otras lenguas hacia el catalán, y la elevación del nivel académico para presentarse a las pruebas y obtener el nombramiento de traductor e intérprete jurado que será como mínimo, un título de diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalente. Las personas que pasen las pruebas, aparecerán inscritas en el Registro de traductores e intérpretes jurados de acuerdo con el Decreto 87/1994, y quedan habilitadas para ejercer profesionalmente como tal.

Los exámenes para obtener la habilitación como traductor jurado constan de las siguientes pruebas eliminatorias:

- Prueba de lengua catalana.
- Prueba de derecho.
- Prueba de traducción de la lengua o las lenguas seleccionadas.
- Prueba de interpretación jurada.

Los exámenes de interpretación jurada constan de las siguientes fases:

- Prueba de catalán.
- Prueba de derecho.
- Prueba de interpretación de la lengua o las lenguas seleccionadas.

Es importante recalcar que no todos los años que se convocan pruebas de habilitación, se convocan pruebas para todas las lenguas.

Las personas que pueden acreditar documentalmente que poseen el nivel de conocimientos superiores de catalán (nivel D o equivalentes de la Junta Permanente de Catalán) quedan exentas de la prueba de lengua catalana y las personas licenciadas en derecho lo están de la prueba de derecho.

Cabe mencionar que en el año 2015, la Dirección de Política Lingüística no convocó las pruebas traducción e interpretación juradas. Sin embargo, las personas que dispongan de una titulación universitaria oficial en traducción e interpretación y cumplan los requisitos de formación específica establecidos en la normativa

⁴ Decreto posteriormente sustituido por el Decreto 119/2000, el 20 de marzo

⁵ Véase apartado de Anexos; I. Decretos, Anexo 3. Nombramiento de traductor/a o intérprete jurado/a al catalán

vigente de traducción e interpretación juradas podrán continuar solicitando la habilitación.

El caso del occitano

En el caso del occitano, el Estatuto de autonomía de Cataluña (EAC) mejora el estatus jurídico del occitano aranés, incorpora aspectos anteriormente recogidos en la Ley 16/1990⁶, de 13 de julio, sobre el régimen especial del Valle de Arán y define la distribución de competencias en relación con el occitano.

Cabe destacar, con respecto a la regulación anterior al EAC, que el artículo 7 de la Ley de política lingüística establecía los preceptos de este texto legal como supletorios de la Ley 16/1990, con la precisión que los preceptos mencionados nunca podían ser interpretados en perjuicio del uso del aranés.

Igualmente, la declaración estatutaria del occitano aranés como lengua propia de Arán, aunque no es precisada en cuanto a sus efectos jurídicos, ratifica el especial compromiso de los poderes públicos con relación a esta lengua, como se desprende del artículo 50.1 del EAC:

"Los poderes públicos tienen que proteger el catalán en todos los ámbitos y sectores y tienen que fomentar su uso, la difusión y el conocimiento. Estos principios también se tienen que aplicar con respecto al aranés."

El artículo 143.2 del EAC fija la competencia de la Generalitat y del Consejo General de Arán en relación con el occitano, con los términos siguientes:

"Corresponde a la Generalidad y también al Consejo General de Arán la competencia sobre la normalización lingüística del occitano, denominado aranés en Arán."

Del precepto se desprende una compartición entre la Generalitat y el Consejo General de la tarea relativa a la normalización lingüística del occitano, sin que se reconozca, como sucede respecto del catalán, una competencia específica en el Estado.

Por tanto, y aunque el occitano está reconocido bajo el Estatuto catalán, no existe un reglamento sobre la traducción jurada ya que, dicho sea de paso, no existe una gran demanda de traducción de este dialecto, por lo que, hasta ahora, se tomaría como referencia, la lengua catalana que es la oficial en la administración catalana a día de hoy.

⁶ Ley derogada por la disposición derogatoria de L 1/2015, de 5 Feb. CA Cataluña (régimen especial de Arán). Véase apartado de Anexos: I. Decretos, Anexo 4. Distribución de competencias en relación con el occitano

ii. País Vasco

El euskera es una lengua genéticamente aislada⁷: es decir, no pertenece a ninguna familia lingüística conocida. Sin embargo, este hecho no ha sido un impedimento para la evolución de la lengua en el ámbito de la traducción. Solo así, la unificación de la lengua estándar (*euskara batua*), cuyas bases se acordaron en Euskaltzaindia, la Real Academia de la Lengua Vasca, en 1968, ha sido posible. Gracias a esta institución, se creó la lengua estandarizada empleada hoy día en la administración, el sistema educativo, los medios de comunicación y la literatura en general. Esto ha hecho posible la consolidación de la lengua y el nacimiento de la traducción jurada en lengua vasca.

iii. Galicia

Hasta 2002, no existía un marco legal autonómico que regulase ni la habilitación de traductores e intérpretes ni los aspectos formales de la profesión. La situación de esta época estaba caracterizada por dos elementos básicos que se compensaban entre sí:

- Baja oferta de traductores e intérpretes.
- Una demanda desigual de servicios, baja en el caso de las traducciones y prácticamente inexistente en el de las interpretaciones (mayor demanda de castellano-gallego).

La inexistencia de traductores jurados se ha ido supliendo, durante años, a través de mecanismos alternativos, entre los que podemos destacar tres por frecuencia de uso:

- Solicitar a la Administración u órgano emisor competente la emisión de un nuevo documento en castellano.
- Realizar una traducción jurada intermedia al castellano, seguida de una traducción jurada del castellano al inglés. Aparte de las dificultades logísticas de requerir los servicios de un traductor jurado de castellano-gallego, esta segunda opción supone tener que pagar dos traducciones juradas, con el inevitable incremento en el precio final.
- Realizar una traducción intermedia al castellano y solicitar su certificación gratuita en algún servicio relacionado con la lengua gallega, desde la propia Dirección Xeral de Política Lingüística o el Servicio Central de Traducción de la Consellería de Presidencia, hasta las oficinas de normalización lingüística locales, provinciales o autonómicas; opción poco viable ya que entre las competencias de los técnicos de normalización lingüística no incluyen la certificación de traducciones, en la práctica se convirtió en uno de los mecanismos más utilizados para solucionar el problema.

⁷Fuente:http://www.euskara.euskadi.eus/r59738/es/contenidos/informacion/herria_hizkuntza/es_7397/herria_hizkuntza.html

Tomando como referencia el decreto catalán 119/2000 de 20 de marzo, de traducción e interpretación juradas, el decreto 267/2002⁸ establecía la independencia de las habilitaciones de traductor jurado y de intérprete jurado, y establecía tres mecanismos de acceso a la habilitación: Reconocimiento de la habilitación concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el acceso a través de la Licenciatura en Traducción e Interpretación y la superación de las pruebas reguladas en el propio decreto. El reconocimiento de la habilitación concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores es automático, siempre que los interesados lo soliciten a la Secretaría Xeral de Política Lingüística, algo que desde 2002 sólo han hecho dos de los trece traductores jurados de castellano-gallego habilitados por el Ministerio.

Los procedimientos para la habilitación de traductores jurado en Galicia son:

- Reconocimiento de la habilitación para los licenciados en traducción e interpretación es automático, previa presentación de instancia y documentación acreditativa para aquellos licenciados que hayan obtenido 24 créditos de traducción para la habilitación como traductor jurado (12 obligatoriamente de traducción jurídica y / o económica y 12 bien de traducción bien de prácticas profesionales o de trabajos de fin de carrera) y 12 créditos de interpretación para la habilitación como intérprete jurado. En la práctica, esto supone la habilitación directa de todos los licenciados en traducción en interpretación de la Universidad de Vigo que hayan realizado sus estudios con gallego como lengua A, ya que tanto el plan de estudios de 1992 como el de 2001 incluyen 24 créditos obligatorios de traducción especializada (jurídica y económica) y 18 créditos de interpretación.
- A través de las pruebas reguladas en el propio decreto que ha permanecido paralizada desde la aprobación del mismo hasta enero de 2007, cuando se publica la primera convocatoria de las pruebas, actualmente en proceso de realización. Se convocaban, concretamente, pruebas de traducción directa e inversa y de interpretación consecutiva de enlace para los siguientes pares de lenguas: gallego-castellano, gallego-portugués, gallego-francés, gallego-inglés y gallego-alemán, a las que podían concurrir candidatos mayores de edad en posesión de un título de diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente. Los candidatos podían matricularse de forma independiente para las pruebas de traducción o para las de interpretación, y para tantas lenguas como desearan de entre las convocadas. Todos ellos deben realizar, además, dos pruebas comunes, una de lengua gallega y otra de derecho, ambas de tipo test y basadas en los temarios correspondientes publicados en el Decreto 267/2002.

⁸ Véase apartado de Anexos; I. Decretos, Anexo 5. La habilitación profesional para la traducción y la interpretación jurada de otras lenguas al gallego, y viceversa.

b. Principales modificaciones de la normativa

El 6 de noviembre 2014 se dispuso una modificación de la ley que se aplica a la traducción jurada en España. Esta orden AEC/2125/2014⁹ que entró en vigor el día 16 de noviembre de 2014 y se publicó en el Boletín Oficial del Estado, revisa la obtención del título de Traductor- Intérprete jurado. Las disposiciones de la nueva ley son las siguientes:

- La obligatoriedad de adjuntar una copia del original sellada y fechada: «A efectos de la comprobación de la autenticidad del original a partir del cual se ha efectuado la traducción, deberá acompañarse copia del mismo, sellado y fechado en todas sus páginas».
- El sello de traductor jurado no podrá llevar datos de contacto: El modelo de sello que se requiere a partir de ahora para validar las traducciones juradas no contiene la dirección y queda reducido a la mínima expresión y que, debe responder al siguiente modelo:

<p style="text-align: center;"><i>(NOMBRE Y APELLIDOS)</i> <i>Traductor/a-Interprete Jurado/a de</i> <i>(IDIOMA) N.º (NÚMERO DE T/I JURADO)</i></p>

- El examen será casi igual, pero tendrá temario para la primera prueba: Para participar en los exámenes no cambian los requisitos. Es preciso ser mayor de edad, de nacionalidad española, de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, así como tener una titulación superior válida en este nuestro Estado español. En las convocatorias, ahora se presentará un anexo con las materias del primer examen. Además, se incluye la posibilidad de responder a la convocatoria por vía telemática, así como se establecen las webs del ministerio y de información pública como espacio donde se anunciarán los resultados (www.exteriores.gob.es y 060.es). El nuevo examen para traductores jurados se compone de tres ejercicios. En cada prueba se obtendrá un resultado eliminatorio («apto» / «no apto»):
 - a. Examen tipo test: gramática y terminología.
 - b. Traducción:
 - Traducción sin diccionario al castellano.
 - Traducción sin diccionario a lengua extranjera.
 - Traducción económica/jurídica al castellano, con diccionario (pero no valen los electrónicos).
 - c. Prueba de interpretación consecutiva y entrevista.
- Nominación del traductor: Además, la declaración jurada también ha sido modificada y ahora específica que la traductora o el traductor en cuestión lo

⁹ Véase de Anexos; I. Decretos, Anexo 8. Normas sobre los exámenes para la obtención del título de Traductor-Intérprete Jurado.

nombra el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. La redacción queda tal que así:

Don/Doña [nombre y apellidos], Traductor/a-Intérprete Jurado/a de [idioma] nombrado/a por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al [lengua de destino] de un documento redactado en [lengua de origen]. En [lugar], a [fecha].

Por supuesto, esto no significa en absoluto que los traductores jurados sean ahora funcionarios, trabajen para el Estado, ni parecido: «no confiere (...) la condición de funcionario público ni supone el establecimiento de ningún vínculo orgánico ni laboral con la Administración General del Estado».

- El carné de traductor-intérprete jurado ahora será de plástico y en color: Se actualiza el carné de traductor-intérprete jurado, que dejará de ser una cartulina con una foto y un sello para adaptarse al siguiente modelo. Los que estén en posesión del antiguo carné, tendrán cinco años para poder cambiarlo.

El plazo para cambiar el sello y el carné antiguo por los nuevos modelos es de dos años en el caso del sello (hasta el 6 de noviembre de 2016) y de cinco años para el carné (hasta el 6 de noviembre de 2019).

El 25 de Abril de 2015 tuvo lugar la última convocatoria del MEC para traductores/intérpretes jurados, después de la aprobación de la Orden AEC/2125/2014 del 6 de Noviembre del 2014 y por lo tanto, no existe ningún modelo disponible del primer ejercicio¹⁰.

4. LA INTERPRETACIÓN JURADA

a. El caso de la formación y habilitación de los Licenciados en Traducción e Interpretación como intérpretes jurados

Existen dos vías para la habilitación del intérprete jurado (los mismos requisitos de formación que para traductor jurado):

¹⁰Fuente:<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/traduccioninterpretacion/Paginas/Examen.aspx>

- A través de un examen convocado por el MAEC, cuya convocatoria se regula según la Orden de 8 de febrero de 1996¹¹, por la cual se dictan normas sobre los exámenes para el nombramiento de intérpretes jurados, B.O.E., 23 de febrero 1996. Los exámenes de Intérprete Jurado constarán de cuatro pruebas de carácter eliminatorio:
 - I. La primera prueba consistirá en la traducción al castellano, sin diccionario, de un texto de carácter periodístico o literario.
 - II. La segunda prueba consistirá en una traducción del castellano a la lengua extranjera, sin diccionario, de un texto de carácter periodístico o literario.
 - III. La tercera prueba consistirá en una traducción al castellano, con diccionario, de un texto de carácter jurídico o económico.
 - IV. En la cuarta prueba el candidato deberá acreditar a satisfacción del Tribunal su capacidad de comprensión y expresión oral en la lengua de que se trate.
- Mediante la posesión del título de Licenciado en Traducción Interpretación o de un título extranjero que haya sido homologado a éste, “siempre que acrediten, mediante la correspondiente certificación académica, que se han superado las asignaturas de dicha licenciatura que, conforme a los planes de estudio de las correspondientes Facultades, otorguen a los Licenciados una preparación específica en traducción jurídica y económica e interpretación oral en la lengua o lenguas para las que se solicite el nombramiento” consistiendo esa preparación en un mínimo de 24 créditos en traducción jurídica y/o económica y de 16 créditos en interpretación. De acuerdo con el marco legal vigente, los titulados en Traducción e Interpretación pueden solicitar directamente el nombramiento como intérpretes jurados sin realizar las pruebas hasta ahora obligatorias, siempre y cuando el itinerario curricular de su licenciatura –en el conjunto del Estado– o curso de postgrado –supuesto aplicable únicamente en Cataluña– incluya una carga lectiva específica en las especialidades de Traducción jurídico económica y en Interpretación. Aunque esta vía de nombramiento directo aparece esbozada ya en el Real Decreto 79/1996 y revisada en la Orden 6955, de 21 de marzo de 1997¹² (B.O.E. de 2 de abril de 1997), es en la Orden AEX/1971/2002, de 12 de julio de 2002 (B.O.E. de 2 de agosto de 2002) donde se expone de forma más precisa el número mínimo de créditos exigidos en cada una de las materias clave que permitirán al licenciado en Traducción e Interpretación solicitar el nombramiento de intérprete jurado sin necesidad de realizar el examen correspondiente. El alcance de esta última modificación resulta evidente a partir de una lectura comparativa de

¹¹ Información extraída del Real Decreto 79/1996, de 26 de enero, por el que se modifican diversos artículos del Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha introducido varias reformas en el sistema de nombramiento de los Intérpretes Jurados. (Fuente: <http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/23/pdfs/A06876-06878.pdf>)

¹² Véase el apartado de Anexos; I. Decretos, Anexo 8. Aprobación del Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas

los siguientes fragmentos de las dos últimas órdenes (Orden AEX/1971/2002, B.O.E. 2 agosto 2002, 28596):

“[...] Se entenderá que los solicitantes poseen una preparación específica en las materias indicadas si han obtenido, en los cursos propios de la licenciatura, un mínimo de 24 créditos en traducción jurídica y económica y de 16 créditos en interpretación. De los 24 créditos en traducción jurídica y económica, al menos 12 deberán corresponder a asignaturas denominadas específicamente “Traducción Jurídica y/o Económica” o a asignaturas denominadas “Traducción especializada” cuya correspondencia con aquellas materias esté avalada por los programas de dichas asignaturas. Los restantes créditos, hasta un total de 24, podrán obtenerse mediante la realización de prácticas en empresas, debidamente tuteladas y avaladas por la Universidad, y/o del proyecto de fin de carrera, siempre que esté directamente relacionado con la traducción de textos jurídicos o económicos. A estos efectos no se tendrán en cuenta los trabajos que versen sobre aspectos teóricos de la traducción (Orden 6955, B.O.E. 2 abril 1997, 10517). [...] se entenderá que los solicitantes poseen una preparación específica en las materias indicadas si han obtenido, en los cursos propios de la licenciatura, un mínimo de 24 créditos en traducción jurídica y/o económica y de 16 créditos en interpretación [...]”

“[...] Los créditos en traducción jurídica y/o económica deberán corresponder a asignaturas denominadas específicamente «Traducción Jurídica y/o Económica» o a asignaturas denominadas «Traducción Especializada». En el caso de las asignaturas denominadas «Traducción Especializada», sólo se tendrán en cuenta los créditos correspondientes cuando las mencionadas asignaturas estén dedicadas en su totalidad a la traducción jurídica y/o económica, debiendo quedar esta característica suficientemente acreditada por los programas correspondientes a dichas asignaturas. En caso de existir en los planes de estudio de las universidades varios tipos de traducción especializada, deberá figurar necesariamente en la certificación académica personal, junto a la denominación de la asignatura, el tipo de traducción especializada que haya cursado el solicitante [...]”

“[...] Los créditos en interpretación deberán corresponder a asignaturas troncales, obligatorias u optativas y las asignaturas deberán haberse cursado exclusivamente con la combinación lingüística lengua B, castellano, debiendo quedar estas características suficientemente acreditadas por los programas correspondientes a dichas asignaturas. Sólo se admitirá un máximo de cuatro créditos por asignaturas de Traducción o Interpretación de libre elección [...]”¹³.

El nombramiento otorgado por el MAEC que reciben los Intérpretes Jurados no implica un carácter contractual con la Administración Pública, sino que sólo posee un carácter temporal y circunstancial, que ofrece un servicio puntual. La mayoría de Intérpretes Jurados trabajan como autónomos; otros trabajan en bufetes de abogados y otros tantos en agencias de traducción.

En cuanto a Cataluña, mediante el Decreto 87/1994, la Generalitat de Cataluña regula la “habilitación profesional” de traductores e intérpretes jurados de “lenguas extranjeras” (como el inglés o el francés) u “otras lenguas” (como el español) hacia el catalán. Por su parte, la entrada en vigor del Decreto 119/2000, procedente de la misma institución, incorpora ciertos avances respecto a su predecesor, entre los que se encuentra la habilitación de los profesionales en “traducción e interpretación inversa”.

5. DESARROLLO DE LA TRADUCCIÓN JURADA/ JURÍDICA EN EL MUNDO PROFESIONAL

El desarrollo de la traducción jurada/jurídica, si bien es cierto que ha experimentado un cambio creciente en el panorama de la traducción, aún existen muchas fallas que afectan a los profesionales del sector, y que intentan desarrollar su cometido profesional con cierta dignidad.

Los traductores jurídicos profesionales pueden trabajar tanto por cuenta propia (como traductores autónomos que ofrecen sus servicios directamente al mercado), como por cuenta ajena (en plantilla de empresas o instituciones).

Los traductores autónomos, generalmente, trabajan desde casa para agencias de traducción que hacen de intermediarios entre ellos y los clientes. En otros casos, trabajan directamente para los clientes que utilizan sus traducciones, normalmente abogados. El traductor jurídico en plantilla suele trabajar en despachos de abogados con gran volumen de traducciones o en organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El traductor jurado puede trabajar en los mismos

¹³Véase apartado de Anexos; I. Decreto, Anexo 2. Requisitos y el procedimiento para la obtención del nombramiento de Interprete Jurado

ámbitos que el traductor jurídico además de para la Administración pública, suelen ser eventuales y a menudo, también trabajan como autónomos.

Tanto las agencias de traducción especializadas en traducción jurídica como los traductores jurados que se dedican a ello suelen tener su propia página web. No es difícil encontrarlos usando Internet. En España, existen también varias agrupaciones de traductores con listados de sus miembros, siendo la más conocida y numerosa ASETRAD¹⁴. En cuando a la traducción jurada, podemos acceder a los traductores jurados a través de la web del MAEC¹⁵. En otras autonomías, como por ejemplo en Cataluña, nos dirigiremos a la Direcció de Política Lingüística; en País Vasco, a la Sede del Gobierno Vasco y, en Galicia, a través de la Xunta. Todas las asociaciones que amparan la actividad de los traductores e intérpretes en España están unificadas bajo una sola asociación llamada Red Vértice, que es la que se encarga de trabajar al unísono por y para el futuro de la traducción e interpretación.

a. Regulación en el mundo profesional

En el caso de España, no contamos con una ley específica que regule los derechos y obligaciones del traductor o intérprete, que contemplen aspectos como su protección jurídica o su situación social y fiscal. Las disposiciones legales vigentes en España que tratan de algún modo el tema de la profesión de los traductores e Intérpretes son, aparte del Reglamento de la Oficina de Interpretación de lenguas que, como ya hemos comentado, no aporta mucho a la regulación de la actuación de los intérpretes jurados, la Orden del 8 de febrero de 1996, por la que se dictan normas sobre los exámenes para la obtención del nombramiento como Intérprete Jurado, y la orden AEX/1971/2002, de 12 de julio, que contempla disposiciones legales para el acceso al nombramiento de intérprete jurado en España. Ninguna de estas tres disposiciones establece unas normas para la práctica profesional del traductor o intérprete, ya sea jurado o no.

b. Vacío legal

Por tanto, podemos fácilmente dirimir el gran vacío legal que existe respecto a la figura del traductor/intérprete jurado. Esta situación se debe, en parte, al uso de la nomenclatura a la hora de nominar a este tipo de traducción; en otros países, distinguen entre traducción oficial, que en España sería el equivalente a traducción jurada, y no oficial para el resto de traducciones. Como podemos ver, un cambio de nominación resolvería por contrapartida, el intrusismo existente en la traducción jurídica, ya que la denominación “oficial” a efectos legales no daría lugar a una normativa laxa, si cabe, como la que existe actualmente.

¹⁴ Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes. (Fuente: <http://www.asetrad.org/index.asp?op=6>)

¹⁵ Ministerio de Asuntos Exteriores. Fuente: <http://www.exteriores.gob.es/PORTAL/ES/SERVICIOSALCIUDADANO/Paginas/Traductoresas---Int%C3%A9rpretes-Jurados.aspx>

La nomenclatura que otros países tienen no genera error a la hora de nombrar o generar la idea de traductor jurado o jurídico, por lo tanto, la idea de ambigüedad a este respecto queda desechada por completo. Lo mismo sería aplicable al ámbito de traducción e interpretación, son dos disciplinas que van de la mano pero que son conceptualmente distintas en cuanto a competencias.

En los últimos años, la traducción e interpretación, más específicamente la jurídica especialmente la relacionada con los procedimientos penales, que se ha visto seriamente perjudicada por los recientes cambios en la legislación, y que ha dado lugar a un importante declive en los protocolos, y como consecuencia, en la calidad de este servicio, lo cual está creando un gran incertidumbre en el mundo de la actividad de la traducción e interpretación jurídica. Más adelante, hablaremos más en profundidad que esta diatriba ha generado dentro del marco español y europeo (*Apartado 8. La Traducción Jurada y Jurídica en el marco europeo*).

6. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS: PLURALIDAD LINGÜÍSTICA

A la hora de realizar una traducción jurada, hay que tener en cuenta en primer lugar los aspectos lingüísticos del texto. Como si de una traducción ordinaria se tratase, hay que tener conocimientos del ámbito de la lengua a traducir así como de cómo funciona el entramado burocrático-administrativo de ambas lenguas. Además, no pocas veces, los textos a traducir incluyen también otros datos que pertenecen a otras materias: médica, jurídica, etc...La problemática radica en cuando traducimos entre sistemas tan diferentes; donde es importante y útil mantener un sistema de referencia en la traducción que nos permita establecer equivalencias, comparaciones, analogías, diferencias, etc...; así como abrirnos la posibilidad de utilizar estructuras macro/microtextuales y formas terminológicas, fraseológicas o formulaciones que den autenticidad al documento traducido. Sin embargo, el problema no radica tanto en la terminología en si o en el uso de un sistema referencial, sino en cómo está estructurado ese sistema, y de ahí la dificultad de referenciarlo de manera precisa y exacta. Un ejemplo sería el entramado administrativo o judicial de un país y todas sus competencias, que difieren de un sistema a otro.

La *literalidad*¹⁶ es uno de los rasgos lingüísticos más problemáticos que aparecen a la hora de hacer traducciones juradas y/o jurídicas, en ciertos aspectos los mismos. Existe una fuerte discrepancia en cuanto al consenso a la hora de como traducir un texto legal o administrativo. Muchos opinan que debido a la exclusividad del texto, la literalidad es el rasgo más importante y que menos riesgo presenta, pero a la vez menos estilístico, incluso para traductores inexpertos en temas legales o administrativos sin embargo, a veces resulta prácticamente imposible. Otros

¹⁶ Acto de traducir palabra por palabra ciñéndose al texto.

prefieren la reformulación del texto para que sea bien entendido, mucho más arriesgado y solo reservado a los que entienden de manera profunda la materia a traducir. No cabe duda que lo ideal sería un texto traducido fiel, profesional y a la vez elegante.

Además, existen una serie de técnicas de traducción para que las traducciones juradas sean adecuadas:

- Traducción literal: Según los lingüistas más puristas, la traducción literal o palabra por palabra. Un ejemplo sería en un registro de nacimiento entre lengua española e inglesa: *Births and Deaths Registration Office*¹⁷ = “Registro de Nacimientos y Defunciones”.
- Traducción morfológica: Se tendrá en cuenta el original y mediante sistema referenciales entre las dos lenguas. Aquí hay que tener conocimientos de cómo funciona el sistema para poder referenciarlo y obviamente más arriesgado para el traductor.
- Adaptación cultural: Mediante la búsqueda de equivalencias que cumplan la misma función en el sistema de la traducción, aunque sus significados sean distintos.
- Traducción mediante definiciones, descripciones o comentarios: Aquí habría que citar y explicar los diferentes sistemas.
- Transcripción: Manteniendo las palabras en la lengua original.
- Traducción establecida por la costumbre, aunque inexacta.
- Traducción establecida de forma obligada por el país de origen.
- Sistemas múltiples que combinan varias técnicas anteriores.

También, existen otras particularidades añadidas en el texto de la traducción jurada, a continuación mencionaremos las más relevantes:

- La traducción de los sellos: Aunque existen fórmulas muy complejas suele plantear bastantes dudas a la hora de traducir y a veces es mejor no traducirlos, lo que los reduce a meros instrumentos ornamentales.
- La capacidad de redacción del traductor: Si bien los textos legales suelen estar mal escritos porque sus redactores son juristas o administradores pero no lingüistas, es por ello que sería interesante que el traductor, dando por hecho que también sea lingüista, tenga conocimientos legales y/o de otros ámbitos. Ya que el hecho de no conocer la materia, ni las técnicas de traducción ni normas lingüísticas desataría una serie de factores que darían lugar a una pésima traducción jurada, que no olvidemos, tienes connotaciones y consecuencias legales. Es por ello, que se requieren altos niveles de profesionalización y especialización en este tipo de traducciones.

¹⁷ El equivalente al Registro Civil Español sería el General Register Office. (Fuente: <http://www.gro.gov.uk/gro/content/>)

- La traducción de los nombres de persona: Estos presentan un problema especialmente en el Registro Civil ya que tanto el nombre como los apellidos varían de un país a otro según sus leyes que hay que conocer.
- La traducción de las profesiones: La equivalencia de profesiones entre un país y otro difiere mucho y, en ocasiones, no encontraremos equivalente.
- La traducción de las divisiones administrativas: El sistema administrativo difiere también de un país a otro. Nos encontraremos, no en pocos casos, con problemas de inequivalencia o inexactitud terminológica. La solución más frecuente en estos casos es la traducción mediante diferentes procedimientos textuales. Aquí la imaginación del traductor es importante para resolver el problema.
- La traducción de las direcciones postales: Las direcciones postales puesto que han de seguir el principio de literalidad por razones lógicas, debemos transcribir todas las palabras de la lengua original. La única parte de una dirección postal que debiéramos traducir es el nombre del país.
- La traducción de las fechas: Hay que atender al formato usado en la lengua a traducir.
- La persona gramatical de las certificaciones: Las certificaciones se redactan normalmente en inglés en la primera persona gramatical (I, [...], do hereby certify that...) mientras que en español se suelen redactar en la tercera persona («El abajo firmante, [...], certifica por la presente que...»).

7. LA TRADUCCIÓN JURADA EN CIFRAS

En este apartado, daremos cuenta de las habilitaciones tanto de traductores como intérpretes jurados al español en España. Como ya hemos mencionado anteriormente, las habilitaciones se llevan a cabo o bien por convocatoria o bien por exención a través de la Licenciatura de Traducción e Interpretación, sólo es válido para los que estuvieron matriculados antes de 2009, este hecho deja fuera, irremediablemente, a todos los que realizan la formación bajo el marco de Bolonia¹⁸ y obtengan el título de Graduado en Traducción e Interpretación por lo tanto, estarán obligados a presentarse a la convocatoria de examen. Además, cabe tener en cuenta que todas las habilitaciones de 2013 se obtuvieron por licenciatura y ninguna por convocatoria.

Como referencia, tomaremos únicamente las habilitaciones obtenidas en el año 2013, año en que basamos nuestro estudio. En la Fig. 1, podemos apreciar las habilitaciones al idioma español. Se habilitaron un total de 565 TIJ en toda España. Podemos observar que casi en su totalidad (418) fueron habilitaciones dentro de la

¹⁸ Proceso iniciado a partir de la Declaración de Bolonia, acuerdo que en 1999 firmaron los ministros de Educación de diversos países de Europa, en la ciudad italiana de Bolonia, que dio inicio a un *proceso de convergencia* que tenía como objetivo facilitar el intercambio de titulados y adaptar el contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales, mejorando su calidad y competitividad a través de una mayor transparencia y un aprendizaje basado en el estudiante cuantificado a través de los créditos ECTS.

combinación inglés-español. A continuación, encontramos la combinación francés-español en segundo puesto en obtener habilitaciones con 143 TIJ. En tercer lugar, la combinación alemán-español con 42 habilitaciones y; árabe-español, neerlandés-español y rumano-español con 8, 1 y 1 habilitaciones; respectivamente. Cabe destacar, que cada año varía el número tanto de convocatoria como de habilitaciones de lenguas minoritarias¹⁹. Por ejemplo, puede darse el caso que un año se convoquen plazas y se habilite a un TIJ de rumano-español y los próximos años no haber ni convocatorias ni habilitaciones (varía mucho en función de la demanda de la Administración y la cualificación de los candidatos). Lo que es más que obvio, es que el inglés sigue siendo la lengua que más habilitaciones expide, quizá por la universalización y familiaridad de la lengua, lo que la hace ser más accesible.

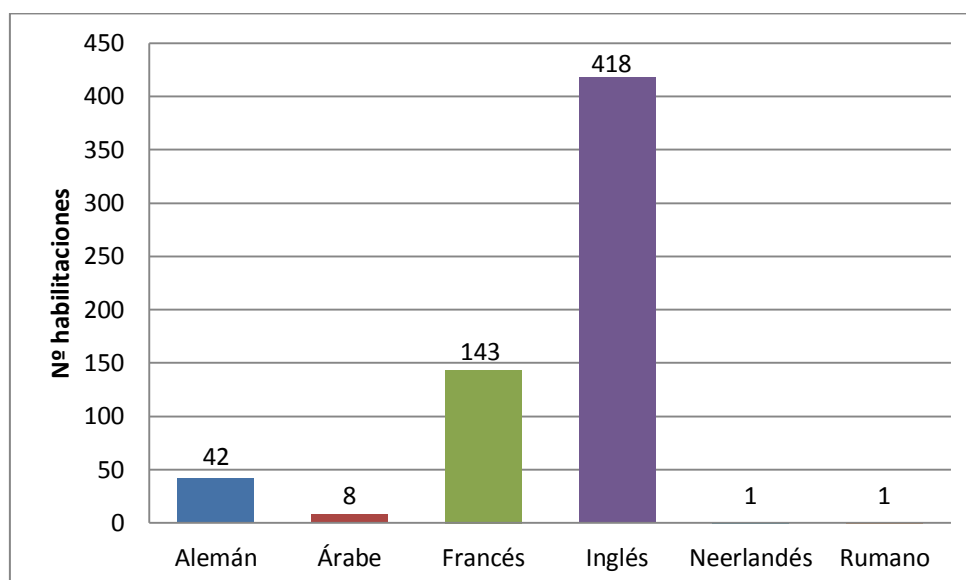


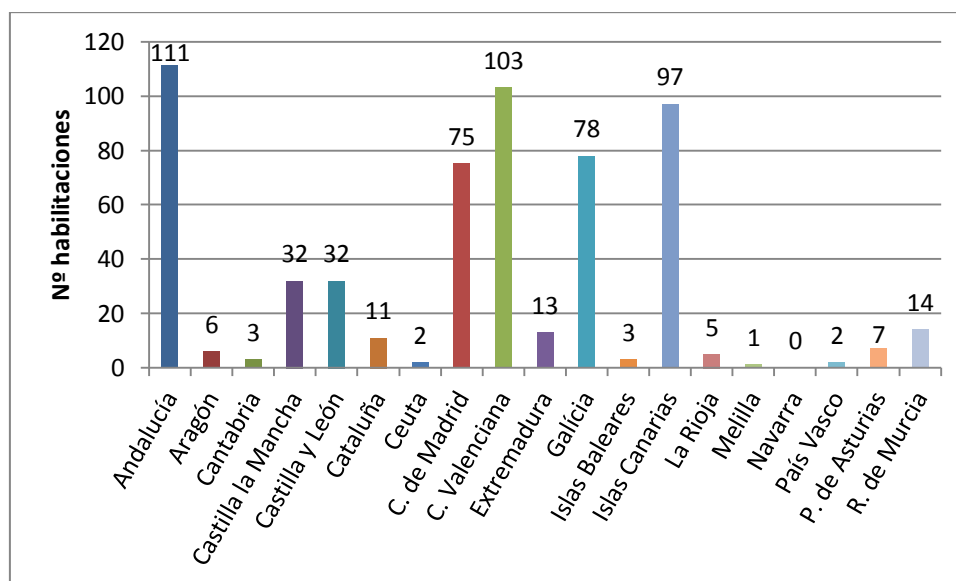
Fig. 1 Número de habilitaciones de traductores e intérpretes jurados por idiomas
(Fuente: Elaboración propia de datos del TIJ²⁰)

A continuación, mostramos las habilitaciones de TIJ por CCAA (Fig. 2). Sorprendentemente, podemos observar que Andalucía posee el mayor número de habilitaciones de toda España, también es en extensión la CCAA más grande. Muy de cerca, le sigue la Comunidad Valenciana con 103 habilitaciones. Paradójicamente, Melilla no tiene ninguna habilitación así como tampoco Navarra. El caso de Cataluña, también es sorprendente: con sólo 11 habilitaciones se sitúa entre una de las CCAA con menos habilitaciones de toda España. Este dato no sería tan relevante sino fuese porque en Cataluña existe una problemática que radica en

¹⁹ Llamaremos así a las lenguas que obtengan menos de 10 habilitaciones al año (Fuente: Propia)

²⁰ Fuente: <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/ListadoTIJ.pdf>

la habilitación de TIJ también en la lengua catalana, escasas o inexistentes (no se convocan desde 2014 y no hay visos de convocatoria futura), hecho que justificaría que la gente buscase la habilitación al idioma español en su defecto²¹.



*Fig. 1 Número de habilitaciones de traductores e intérpretes jurados por CCAA
(Fuente: Elaboración propia de datos del TIJ)*

8. LA TRADUCCIÓN JURADA Y JURÍDICA EN EL MARCO EUROPEO²²

A pesar de tratarse de una profesión cuyo acceso se ha regido por una normativa claramente establecida, la actividad de los traductores/intérpretes jurados no cuenta con un marco jurídico que determine sus derechos y deberes de manera taxativa.

La normativa tan sólo regula el carácter oficial de las traducciones e interpretaciones realizadas por un TIJ, en tal caso, la OIL es la que vela por el registro de TIJ y la publicación de sus datos.

Por otro lado, nos encontramos con la regulación de los traductores e intérpretes jurídicos. Si bien desempeñan actividades parecidas a las de un TIJ, la única diferencia es que no están reconocidos por el MAEC ni existe ningún registro de profesionales. Y aquí es donde subyace la problemática.

En 2010, tuvo lugar la transposición de la Directiva europea 2010/64/UE²³ que hace referencia a la Traducción e Interpretación en los procesos penales. Esta

²¹Fuente: http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/traduccio_i_interpretacio_jurades/registre_de_traductors_i_interprets_jurats/

²²Algunas informaciones tienen como fuente la Charla "El derecho a la interpretación y a la traducción en los procedimientos penales: la Directiva 2010/64/UE, una oportunidad perdida?" por Lluís Cavallé i Saula y José Luis Díez Lerma (27 de Abril de 2015 en FTI, UAB)

Directiva es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros y debería haberse transpuesto antes de octubre de 2013, tras un periodo extraordinario de tres años para hacerlo. Como podemos ver, España ya ha incumplido este plazo y ha sido multada por ello.

Esta Directiva nos habla de que toda persona ha de tener la asistencia de un intérprete en un procedimiento penal hasta su detención, o bien, hasta el juicio vista o fin del proceso judicial. Además, la interpretación tendrá que ser de calidad y llevaba a cabo por personal cualificado para realizar dicha tarea²⁴.

Por desgracia, en España las cosas se han hecho tarde y mal. Tarde, porque aún no se ha llevado a cabo la creación del Registro de profesionales ni la entrada en vigor de la Directiva. Y mal, porque a pesar de que las directrices son claras respecto a la calidad de la interpretación, el borrador que se pretende aprobar, no ofrece ninguna garantía a este respecto. A día de hoy, para ser intérprete o traductor jurídico no es necesario acreditar ningún requisito, más allá de declarar que se habla el idioma en cuestión (tampoco se piden pruebas de nivel), y es que nos encontramos regulados por una ley obsoleta, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1882²⁵, en la que la excepción se ha convertido en la norma. Y es que la crisis económica junto con la ausencia de un sólido Registro de profesionales, ha disparado el ingenio de unos cuantos, lo cual ha fomentado el intrusismo laboral en esta actividad, amparado por la misma Administración, que parece estar más interesada en una política de “recortes” que en velar por el derecho a la justicia.

Diversas asociaciones de traductores e intérpretes se han unido bajo la Red Vértice²⁶ para dar propuestas y proponer enmiendas sobre cómo hacer la transposición, como crear un registro con todas las garantías, así como un modelo para que presenten la enmienda al Congreso de los Diputados²⁷. Lo primero que se encontraron fue una total ignorancia a la hora de establecer lo que es un traductor y un intérprete, y no digamos ya la distinción entre jurado o jurídico.

²³ Véase apartado de Anexos; I. Decreto. Anexo 6. Transposición de la Directiva europea 2010/64

²⁴ Directiva 2010/64/EU. Art 2.8. La interpretación facilitada con arreglo al presente artículo tendrá una calidad suficiente para salvaguardar la equidad del proceso, garantizando en particular que el sospechoso o acusado en un proceso penal tenga conocimiento de los cargos que se le imputan y esté en condiciones de ejercer el derecho a la defensa. (I. Decretos, Anexo.6. Transposición de la Directiva Europea 2010/64).

²⁵ Ley del Enjuiciamiento Criminal Artículo 441. El intérprete será elegido entre los que tengan título de tales, si los hubiere en el pueblo. En su defecto será nombrado un maestro del correspondiente idioma, y si tampoco lo hubiere, cualquier persona que lo sepa. Si ni aun de esta manera pudiera obtenerse la traducción, y las revelaciones que se esperasen del testigo fueren importantes, se redactará el pliego de preguntas que hayan de dirigírsele, y se remitirá a la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Estado para que, con preferencia a todo otro trabajo, sean traducidas al idioma que hable el testigo. El interrogatorio ya traducido se entregará al testigo para que, a presencia del Juez, se entere de su contenido y se redacte por escrito en su idioma las oportunas contestaciones, las cuales se remitirán del mismo modo que las preguntas a la Interpretación de Lenguas. Estas diligencias las practicarán los Jueces con la mayor actividad. (Fuente: <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036>).

²⁶ Como su nombre indica, agrupa a las diversas asociaciones españolas dedicadas a velar por los intereses de Traductores, Intérpretes y Correctores de España.

²⁷ Véase apartado de Anexos; II. Red Vértice. Anexo. 4. Modelo carta diputados_18.09.14

Entre las propuestas²⁸ que se aportaron destacan la creación de un registro de calidad, como ocurre con los TIJ; la creación de un examen válido, fiable y a nivel nacional (los TIJ estarían exentos) y, la derogación expresa del Art. 441 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal²⁹. La respuesta que se obtuvo fue un rotundo no, principalmente por la falta de presupuesto y por la complejidad a nivel estatal de dichos supuestos.

Muchos países cuentan ya con un registro, debido a que transpusieron la Directiva hace cinco años, es el caso de Holanda. Otros países, como Francia, ya contaban con un modelo de gestión directa, donde se realizan pruebas para contratar a intérpretes de calidad. Este modelo, también está implantado en Canarias, por el intérprete Miguel Ángel González Reyes, que también contrata a intérpretes de calidad.

En Cataluña, el panorama no es más alentador, aunque ofrece algo de luz al final de este desastroso panorama. El actual gobierno catalán de Artur Mas, se halla preparando su propio registro de intérpretes, en visto de que el gobierno central no está por la labor. Para ello, aprobaron el Decreto Ley 8/2014, el 23 de diciembre, para crear dicho registro³⁰. Sin embargo, la habilitación del intérprete, no dista mucho de las pretensiones del gobierno central, aunque, si bien es cierto, se enumeran una serie de requisitos mínimos³¹, siguen siendo requisitos muy generales, meramente desde el punto de vista lingüístico, aún queda mucho trabajo por hacer y deja la puerta abierta a la temida invasión de competencias. A pesar de que es un paso adelante y Red Vértice tiene sus esperanzas en este Decreto Ley Catalán, cabe suponer, que el gobierno central invalidará cualquier propuesta proveniente Cataluña aludiendo el traspaso de competencias, pero quizá sirva de modelo para crear un nuevo y esperanzador marco legislativo para los traductores e intérpretes jurídicos.

9. CONCLUSIONES

Después de establecer las diferencias entre traducción jurídica y jurada y las diferentes problemáticas, vamos a enumerar las principales conclusiones de este trabajo se centran en las fallas tanto en la formación como en la legislación vigente. Si bien en la actividad de TIJ, la legislación se sitúa en una situación privilegiada con respecto a la TI jurídica, aún queda mucho por hacer para obtener el prestigio y reconocimiento del que gozan estos profesionales en otros países de Europa.

²⁸ Véase apartado de Anexos; II. Red Vértice. Anexo 1. Carta de Red Vértice al Ministerio de Justicia: Hacia un nuevo modelo de gestión de la traducción y la interpretación judicial.

²⁹ Véase apartado de Anexos; II. Red Vértice. Anexo 3. Red Vértice se reúne con los ponentes del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal

³⁰ Decreto-ley 8/2014, de 23 de diciembre, por el que se crea el Registro de traductores e intérpretes judiciales para su actuación ante los órganos judiciales con sede en Cataluña. (Fuente: <http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/07/pdfs/BOE-A-2015-1167.pdf>)

³¹ Art. 8.1 del Decreto-ley 8/2014, de 23 de diciembre, por el que se crea el Registro de traductores e intérpretes judiciales para su actuación ante los órganos judiciales con sede en Cataluña (Fuente: <http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/07/pdfs/BOE-A-2015-1167.pdf>)

En relación a la formación de los traductores e intérpretes jurídicos, estoy plenamente de acuerdo con lo que propone la Red Vértice de poder realizar un examen para obtener dicho status y la creación del registro para evitar así, el intrusismo profesional y desamparo legal en esta profesión. Y es que, la indefensión a la que se enfrentan miles de profesionales sólo llevará a la extinción de la profesión, donde cualquiera podrá ejercer.

En cuanto a la habilitación, la exención del examen a través de la posesión del título de Licenciatura no me parece procedente, y en ningún caso, se debería acceder de manera automática a la obtención del certificado, ya que para acceder a la carrera universitaria también se ha de acceder por examen y, por esta razón, es aún más importante prestarle especial atención a un ámbito tan específico como el judicial, y más si cabe cuando se desarrolla fuera del ámbito académico, i.e. el profesional.

Si, a nivel nacional el panorama no es para nada halagüeño, para aquellas CCAA que presentan una situación de bilingüismo es aún más pesimista. Viendo el poco compromiso de las propias comunidades respecto a la normalización de sus propias lenguas, si ya de por sí se encuentran en estado de poco prestigio, con la poca dedicación de sus gobiernos, no podrán subsistir. El caso de Cataluña, me llama poderosamente la atención que la Generalitat, dado la defensa a ultranza que hace de la lengua catalana, es impensable que no se convoquen plazas para TIJ y, más aún que solo se obtengan 11 habilitaciones para el castellano. Por tanto, existe una problemática a la que si no se le pone un reglamento junto con una potenciación de la lengua, está condenada a desaparecer, con las consiguientes consecuencias a nivel laboral en la CCAA. En cuanto al occitano, dada la escasa demanda, se toma también como referencia el catalán. La situación del gallego es muy similar al catalán, aunque es cierto que el gallego se encuentra en un estatus no poco prestigio y eso ha hecho que de alguna manera esté "mal visto", por ello creo que no existen TIJ de gallego y apenas se convocan plazas.

Podemos concluir, que el panorama no es para nada multilingüe ya sea por los instrumentos legales que entorpecen sobremanera la correcta normalidad de las lenguas cooficiales en las CCAA estudiadas en este trabajo, o la mala aplicación de las leyes; unos dirían que por intereses políticos, otros por desdén; pero este es un tema que no cabe discutir aquí ya que necesitaría de un análisis más exhaustivo en relación a la política actual.

10. DIRECCIONES ÚTILES

D. Julio Núñez Montesinos Subsecretario Ministerio de Asuntos Exteriores	D ^a M ^a Luisa Gurruchaga Zamascona Directora Oficina de Interpretación de Lenguas
--	---

Registro General Plaza de la Provincia,1 28012-MADRID Tfno. 91/3662837 Fax 91/3663953	Goya, 6 28001-MADRID Tfno. 91/5777500 Fax 91/5781968
D ^a Julia Escobar APETI Calle Recoletos, 5, 3 ^o 28001-MADRID Tfno. 91/5763142	D. D. Josep Peñarroja Fa Presidente Asociación de Traductores e Intérpretes Jurados de Cataluña Avda. del Bogatell, 21, 5 ^o , 1 ^a 08005-BARCELONA Tfno. 93/2211055
Lourdes Auzmendi EIZTE Avda. de la Zurriola, 14, 1 ^o Izda. 20002-SAN SEBASTIÁN	Traductors i Intèrprets Associats proCol-legi (TRIAC) Ausias March, 60 08010-BARCELONA Tfno. 93/2655217-76 Fax 93/2655158
AGPTI Rúa de Afonso XIII, 21 (baixo praza interior) 36201 Vigo Pontevedra Tfno (+34) 698 150 322	APTIC Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya C. Llull, 63-69, 2n 7a 08005 Barcelona Telèfon: 93 667 56 24
Dirección General de Política Lingüística c. Mallorca, 272, 1 ^o , 08037 Barcelona	ASETRAD Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes c/ Andrés Mellado, 60, bajo B derecha 28015 Madrid Tel. 915 438 891

11. BIBLIOGRAFIA

Charlas

CAVALLÉ I SAULA, Lluís; DIEZ LERMA, Jose Luis (2015). “El derecho a la interpretación y a la traducción en los procedimientos penales: la Directiva

2010/64/UE, una oportunidad perdida?" Universitat Autònoma de Barcelona. Cerdañola del Vallés.

Recursos online

Asociaciones

AGPTI. Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación. [En línea]. Disponible en: <http://www.agpti.org/> [Consulta el 10 Enero de 2015]

APTIC. Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya. [En línea]. Disponible en: <http://www.aptic.cat/> [Consulta el 10 Enero de 2015]

APTIJ. Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados. [En línea]. Disponible en: [Consulta el 10 Enero de 2015]

ASETRAD. Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes. [En línea]. Disponible en: <http://www.asetrad.org/index.asp?op=6> [Consulta el 10 de Enero de 2015]

EIZIE. Asociación de Traductores, Correctores e Intérpretes de Lengua Vasca. [En línea]. Disponible en: <http://www.eizie.eus/es/> [Consulta el 10 Enero de 2015]

EUSKADI EUS. Sede electrónica del gobierno vasco. [En línea]. Disponible en: http://www.euskara.euskadi.eus/r59738/es/contenidos/informacion/herria_hizkuntza/es_7397/herria_hizkuntza.html [Consulta el 10 de Enero de 2015]

GENCAT. Generalitat de Catalunya. [En línea]. Disponible en: <http://web.gencat.cat/ca/inici/> [Consulta el 10 d Enero de 2015]

HM Passport Office [En línea]. Disponible en: <http://www.gro.gov.uk/gro/content/> [Consulta el 10 Enero de 2015]

MAE. Ministerio de Asuntos Exteriores [En línea]. Disponible en: <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/traduccioneinterpretacion/Paginas/Examen.aspx> [Consulta el 10 Enero de 2015]

Red Vértice. [En línea]. Disponible en: <http://www.redvertice.org/> [Consulta el 10 Enero de 2015]

RITAP. Red de Intérpretes y Traductores de la Administración Pública. Madrid: Ministerio de AAEE y de Cooperación. [En línea]. Disponible en: [Consulta el 28 de Abril de 2015]

Xunta Galega. [En línea]. Disponible en: <http://www.xunta.es/linguagalega/politica-linguistica>. [Consulta el 10 de Enero de 2015]

Blogs

GASCÓN NASARRE, Fernando A. [En línea]. *El Gascón jurado: El blog de Traducción Jurada, Jurídica y Judicial*. Disponible en: <http://www.elgasconjurado.com/> [Consulta el 10 de Enero de 2015]

MARTÍNEZ, Begoña. [En línea]. *Júramelo: El blog sobre Traducción*. Disponible en: <http://blogjuramelo.es/> [Consulta el 10 de Enero de 2015]

Decretos, leyes y directivas

Cataluña. Real Decreto Orden CLT/101/2003, de 26 de febrer, sobre l'adaptació del procediment de sol·licitud de nomenament de traductor/a o intèrpret jurat/ada al català i del català a altres llengües a la realització per sistemes telemàtics. [En línea]. *Gencat*, [Consulta el 28 de Abril de 2015]. Disponible en: http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/altres/arxius/ti_ordre101_03.pdf

España. Real decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se, aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores. [En línea]. *Boletín Oficial del Estado, 28 de Octubre de 1977*, [Consulta el 28 de Abril de 2015]. Disponible en: <http://www.boe.es/buscar/pdf/1977/BOE-A-1977-24564-consolidado.pdf>

España. Real Decreto Orden AEX/1971/2002, de 12 de julio, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para la obtención del nombramiento de Intérprete Jurado por los Licenciados en Traducción e Interpretación. [En línea]. *Boletín Oficial del Estado, 02 de Agosto de 2002*, [Consulta el 28 de Abril de 2015]. Disponible en: <http://www.boe.es/boe/dias/2002/08/02/pdfs/A28596-28597.pdf>

España. Ley 1/2015, 5 febrero, Distribución de competencias en relación con el occitano [En línea]. *Boletín Oficial del Estado, 4 de Marzo de 2015* [Consulta el 28 de Abril de 2015]. Disponible en: <http://boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2294.pdf>

España. Decreto ley Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, por la que se dictan normas sobre los exámenes para la obtención del título de Traductor-Intérprete Jurado. [En línea]. *Boletín Oficial del Estado*, 15 de Noviembre de 2014 [Consulta el 28 de Abril de 2015]. Disponible en: <http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/15/pdfs/BOE-A-2014-11801.pdf>

España. Decreto ley Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se desarrolla el artículo 15.2 del Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas.[En línea]. *Boletín Oficial del Estado*, 02 de Abril de 1997 [Consulta el 28 de Abril de 2015]. Disponible en: <http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/02/pdfs/A10517-10518.pdf>

Galicia. Decreto 267/2002, de 13 de junio, La habilitación profesional para la traducción y la interpretación jurada de otras lenguas al gallego, y viceversa [En línea]. *Diario Oficial de Galicia*, 20 de Septiembre de 2002 [Consulta el 28 de Abril de 2015]. Disponible en: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2002/20020920/AnuncioF09E_es.html

País Vasco. Decreto 88/2009, de 21 de abril, sobre habilitación de traductores e intérpretes jurados. [En línea]. *Diario Oficial del País Vasco*, 04 de Mayo de 2009 [Consulta el 10 de Enero de 2015]. Disponible en: http://www.euskara.euskadi.eus/r59738/es/contenidos/nota_prensa/zinpeko_itzultz_interp_habilit/es_dekretua/adjuntos/882009DEKRETUA.pdf

Unión Europea. Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (DOUE L 280, DEL 26). [En línea]. Disponible en: http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/31944/directiva-2010-64-ue-del-parlamento-europeo-y-del-consejo-de-20-de-octubre-de-2010-relativa-al-der#Top00000_00 [Consulta el 28 de Abril de 2015]

Revistas

MONZÓ NEBOT, Ester (2005). *La Web del Traductor Jurídico: compartir recursos para crear una comunidad*. En *TRANS: revista de traductología*, Nº 9, 2005, págs. 161-178. Disponible en: http://www.trans.uma.es/Trans_9/t9_161-175_EMonzo.pdf [Consulta el 10 de Enero de 2015]

PERDU HONEYMAN, Nobel-Augusto; RIDAO RODRIGO, Susana (2014). *Dificultades de la traducción jurídica y jurada*. Nº 20 (2014), págs. 9-26. Disponible en: <http://iesgtballester.juntaextremadura.net/web/profesores/tejuelo/vinculos/articulos/r20/02.pdf> [Consulta el 10 de Enero de 2015]

Tesis e investigación

BORJA ALBI, A. (2004). *La investigación en traducción jurídica* [En línea]. Trabajo de Investigación GITRAD. Alicante: Universitat Jaume I. Disponible en: http://www.gentt.uji.es/Publicacions/Borja_La_investigacion_en_TJ.pdf

GIAMBRUNO, Cynthia (1997). *Language mediation in the judicial system: the role of the court interpreter* [En línea]. Tesis doctoral. Alicante: Universidad de Alicante. Disponible en: <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/3554> [Consulta el 10 de Enero de 2015]

ANEXOS

I. DECRETOS

- *Anexo 1. Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto*
- *Anexo 2. ORDEN AEX/1971/2002, de 12 de julio, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para la obtención del nombramiento de Intérprete Jurado por los Licenciados en Traducción e Interpretación.*
- *Anexo 3. Nombramiento de traductor/a o intérprete jurado/a al catalán (ORDRE CLT/101/2003, de 26 de febrer, sobre l'adaptació del procediment de sol·licitud de nomenament de traductor/a o intèrpret jurat/ada al català i del català a altres llengües a la realització per sistemes telemàtics).*
- *Anexo 4. Ley [CATALUÑA] 1/2015, 5 febrero, Distribución de competencias en relación con el occitano.*
- *Anexo 5. Decreto 267/2002, de 13 de junio, La habilitación profesional para la traducción y la interpretación jurada de otras lenguas al gallego, y viceversa.*
- *Anexo 6. Transposición de la Directiva Europea 2010/64.*
- *Anexo 7. Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, por la que se dictan normas sobre los exámenes para la obtención del título de Traductor-Intérprete Jurado.*
- *Anexo 8. Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se desarrolla el artículo 15.2 del Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas.*

I. RED VÉRTICE

- *Anexo 1. Carta de Red Vértice al Ministerio de Justicia: Hacia un nuevo modelo de gestión de la traducción y la interpretación judicial.*
- *Anexo 2. Comunicado APTIJ-Vértice (07/07/14).*
- *Anexo 3. Red Vértice se reúne con los ponentes del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal³².*
- *Anexo 4. Modelo carta diputados_18.09.14.*
- *Anexo 5. Comunicado de Red Vértice el 23/10/13.*

³² Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo, relativa al derecho a información en los procesos penales

I. DECRETOS

Anexo 1. Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

24564 REAL DECRETO 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se, aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La Oficina de Interpretación de Lenguas fue estructurada orgánicamente por Orden ministerial de dieciocho de abril de mil novecientos setenta y siete, en la que se incluía a la Sección Segunda de dicha Oficina creada por el Real Decreto trescientos ochenta y uno/mil novecientos setenta y siete, de dieciocho de febrero. La nueva estructuración, así como la necesidad de adoptar a las actuales circunstancias las normas reguladoras de la Oficina de Interpretación de Lenguas, aconsejan la promulgación de un nuevo Reglamento en el que se precisen las competencias de dicha Oficina. En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, previo dictamen favorable de la Comisión Superior de Personal y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de agosto de mil novecientos setenta y siete,

DISPONGO

Artículo único.-Se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyo texto se insertará, junto al presente Real Decreto, en el "Boletín Oficial del Estado».

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.-El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Segunda.-Se autoriza, al Ministro de Asuntos Exteriores a dictar las disposiciones necesarias para la aplicación del Reglamento.

Tercera.-Quedan derogados los artículos cuarenta y ocho, cuarenta y nueve y cincuenta del Reglamento de 1815 Carreras de Interpretación de Lenguas del

Ministerio de Estado y de Intérpretes en el Extranjero de veintisiete de abril de mil novecientos, así como el Reglamento de la Carrera de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, de trece de enero de mil novecientos cincuenta y seis y cuantas disposiciones de rango inferior se opongan a lo establecido en el presente Reglamento.

Dado en Palma de Mallorca a veintisiete de agosto de mil novecientos setenta y siete.

JUAN CARLOS

El Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO OREJA AGUIRRE

REGLAMENTO DE LA OFICINA DE INTERPRETACION DE LENGUAS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

CAPITULO PRIMERO

De las funciones de la Oficina de Interpretación de Lenguas

Artículo 1. La Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores es la autoridad suprema en materia de traducción al español.

Art. 2. Compete a la Oficina de Interpretación de Lenguas (Sección Primera) la traducción al español de los siguientes documentos:

- a) Los que le remitan a tal efecto el Ministro, el Subsecretario e la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores.
- b) Los cursados a través de la Subsecretaria de Asuntos Exteriores por otros Organismos oficiales, cuando las traducciones hayan de publicarse con carácter oficial o hayan de hacer fe ante las autoridades o Tribunales.
- c) Los que le remitan las autoridades judiciales españolas.
- d) Los que le remitan los Tribunales o le presenten personas particulares en caso de impugnación de la traducción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 601 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- e) Los cursados por conducto de las autoridades españolas que actúen como remitentes o destinatarios para, la práctica de diligencias en ejecución de convenios internacionales de las que no resulte obligada la tramitación en español.

Art. 3. Compete igualmente a la Oficina de Interpretación de Lenguas (Sección Primera):

- a) Revisar las traducciones que le remitan a este efecto las autoridades a que se refiere el artículo anterior.
- b) Revisar, si lo fuera solicitado por las autoridades competentes, las traducciones de los intérpretes jurados.
- c) Emitir dictámenes en materia de su competencia, a petición de los Tribunales o de las autoridades a que se refiere el artículo anterior.

Art. 4. La Oficina de Interpretación de Lenguas no estará obligada a traducir ni a revisar las traducciones de documentos escritos en letra que, por su antigüedad, o mala forma, resulten ininteligibles, en tanto no sean convenientemente descifrados por Paleógrafos o Peritos autorizados.

Art. 5. La Oficina de Interpretación de Lenguas pondrá anualmente en conocimiento del público la lista de los idiomas de los que puede expedir traducciones.

Art. 6. Las traducciones a que se refiere el apartado d) del artículo 2 y las revisiones a que alude el párrafo b) del artículo 3 devengarán los derechos previstos en los aranceles de la Oficina de Interpretación de Lenguas. En todo caso, no devengarán derecho alguno las traducciones o revisiones de documentos relativos a pleitos en los que la persona interesada en obtener la traducción o revisión goce del beneficio de pobreza.

Art. 7. Corresponde a la Oficina de Interpretación de Lenguas (Sección Segunda), de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 381/1977 de 18 de febrero, la traducción del español a idiomas extranjeros y la interpretación: oral de los mismos que le sean encomendadas por el Ministro, el Subsecretario o la Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores.

CAPITULO II

De la carrera de interpretación de lenguas

Art. 8. Los aspirantes a ingreso en la carrera de interpretación de lenguas deberán ser españoles, mayores de edad, estar en posesión del título de Bachiller Superior o su equivalente en países extranjeros, no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la función y no haber sido separados, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado o de la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Art. 9. En la carrera de interpretación de lenguas se ingresará por oposición, en la que los candidatos habrán de acreditar que conocen suficientemente el francés y el inglés, además del tercer idioma anunciado como especial en la correspondiente convocatoria. Uno de los ejercicios del examen consistirá en la traducción de documentos de carácter jurídico y comercial. En los tres años siguientes al ingreso

en la carrera de interpretación de lenguas, los funcionarios de ésta deberán conocer suficientemente, a efectos de traducción, un cuarto idioma que se determinará, al final de la oposición, teniendo en cuenta el idioma de su especialidad, las necesidades del servicio y los deseos del funcionario.

Art. 10. Dentro de los quince días siguientes a aquel en que se produzca una vacante se procederá a la correspondiente convocatoria, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». En dicha convocatoria se fijará el plazo para admisión de solicitudes, que será de tres meses como mínimo. También se especificará el idioma especial que haya de ser objeto de la oposición.

Art. 11. El Tribunal que juzgue las oposiciones para ingreso en la carrera de interpretación de lenguas estará compuesto por dos funcionarios de la carrera diplomática, que serán el Presidente y el Secretario del Tribunal; un Catedrático de Filología de la Universidad Complutense y dos funcionarios de la carrera de interpretación de lenguas.

El Tribunal determinará el número de ejercicios y el orden en que hayan de realizarse. Para aprobar se requerirá la puntuación mínima que se haya fijado en la convocatoria.

El Tribunal podrá proponer antes del comienzo de los ejercicios si lo cree necesario que entren a formar parte del mismo una o dos personas ajenas a la carrera de interpretación de lenguas, en calidad de asesores. En todo lo demás, el ingreso en la carrera de interpretación de lenguas se regirá por las normas generales para ingreso en la Administración Pública.

Art. 12. La carrera de interpretación de lenguas se regirá, en todo lo no previsto expresamente en el presente Real Decreto, por la legislación general relativa a la función pública.

CAPITULO III

De los Intérpretes Jurados

Art. 13. Las traducciones al español que realicen los Intérpretes Jurados tendrán carácter oficial, y sólo serán sometidas a revisión por la Oficina de Interpretación de Lenguas cuando lo exijan las autoridades competentes.

Igualmente, si las autoridades o funcionarios competentes lo exigieran, la firma de los Intérpretes Jurados podrá ser legalizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores o por el Gobierno Civil de la provincia en que ejerza su profesión el Intérprete Jurado.

Art. 14. El nombramiento de Intérpretes Jurados se hará por el Ministerio de Asuntos Exteriores previo examen de los candidatos, por la Oficina de

Interpretación de Lenguas, de los idiomas para cuya traducción al español desee ser autorizado el solicitante.

Art. 15. Los exámenes a que se refiere el artículo anterior comenzarán los días 18 de mayo y 15 de noviembre de cada año, o el día siguiente, si éstos fueran festivos, pudiendo tomar parte en los mismos quienes reúnan las siguientes condiciones:

- a) Ser español y mayor de edad.
- b) Ser Bachiller Superior o su equivalente en país extranjero.
- c) Carecer de antecedentes penales.
- d) Presentar la correspondiente solicitud antes del 30 de abril o del 31 de octubre, según la fecha en que deseen presentarse al examen.

Art. 16. Los Intérpretes Jurados fijarán libremente los honorarios que deban percibir por sus traducciones, pero estarán obligados a comunicar a la Oficina de Interpretación de Lenguas y al correspondiente Gobierno Civil las tarifas que apliquen. Dicha comunicación deberá hacerse en el mes, de enero de cada año.

Art. 17. A los efectos de lo previsto en los artículos 16 y 18, los Intérpretes Jurados deberán, inscribirse en el correspondiente Registro, que se llevará en el Gobierno Civil de la provincia en que ejerzan su profesión.

Anexo 2. ORDEN AEX/1971/2002, de 12 de julio, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para la obtención del nombramiento de Intérprete Jurado por los Licenciados en Traducción e Interpretación.

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

15637 ORDEN AEX/1971/2002, de 12 de julio, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para la obtención del nombramiento de Intérprete Jurado por los Licenciados en Traducción e Interpretación.

El Real Decreto 79/1996, de 26 de enero, modificó el artículo 15 del Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se regula, entre otros aspectos, el nombramiento de Intérpretes Jurados, estableciendo que podrán solicitar este nombramiento, sin necesidad de realizar los exámenes previstos en el artículo 14

del propio Real Decreto, las personas que se encuentren en posesión del título español de Licenciado en Traducción e Interpretación, o de un título extranjero que haya sido homologado a éste, siempre que acrediten, mediante la correspondiente certificación académica, que han superado las asignaturas de dicha licenciatura que, conforme a los planes de estudio de las correspondientes Facultades, otorguen a los Licenciados «una preparación específica en traducción jurídica y económica e interpretación oral en la lengua o lenguas para las que se solicite el nombramiento».

En desarrollo de este precepto, la Orden de 21 de marzo de 1997 estableció los requisitos concretos que los Licenciados en Traducción e Interpretación deberían cumplir para ser nombrados Intérpretes Jurados sin realizar los exámenes que convoca anualmente el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Al cabo de cinco años de aplicación de esta Orden se ha puesto de manifiesto la necesidad de proceder a su modificación para precisar con mayor nitidez los requisitos establecidos por la misma, así como la forma de proceder a su acreditación, todo ello con la finalidad de evitar interpretaciones equívocas de la norma que puedan dificultar su correcta aplicación.

En su virtud, en uso de la habilitación concedida por la disposición final primera del Real Decreto 79/1996, de 26 de enero, vengo a disponer:

Primero.—De conformidad con lo establecido en el artículo 15.2 del Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, según la redacción dada al mismo por el Real Decreto 79/1996, de 26 de enero, las personas que se encuentren en posesión del título español de Licenciado en Traducción e Interpretación, o de un título extranjero que haya sido homologado a éste, podrán obtener, sin necesidad de realizar los exámenes previstos en el artículo 14 del citado Real Decreto, el nombramiento de Intérprete Jurado, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

- a) Poseer la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro del espacio económico europeo.
- b) Acreditar, mediante la correspondiente certificación académica, que han superado las asignaturas de la licenciatura en Traducción e Interpretación o titulación extranjera equivalente debidamente homologada, que, conforme a los planes de estudio de las correspondientes Facultades, otorguen a los Licenciados una preparación específica en traducción jurídica y económica e interpretación oral en la lengua o lenguas para las que se solicite el nombramiento.
- c) En el supuesto de títulos extranjeros homologados correspondientes a sistemas educativos de países en los que el español no sea la lengua oficial, acreditar que una de las lenguas estudiadas es el español.

Segundo.—A efectos de lo dispuesto en el párrafo b) del apartado anterior, se entenderá que los solicitantes poseen una preparación específica en las materias indicadas si han obtenido, en los cursos propios de la licenciatura, un mínimo de 24 créditos en traducción jurídica y/o económica y de 16 créditos en interpretación.

Los créditos en traducción jurídica y/o económica deberán corresponder a asignaturas denominadas específicamente «Traducción Jurídica y/o Económica» o a asignaturas denominadas «Traducción Especializada». En el caso de las asignaturas denominadas «Traducción Especializada», sólo se tendrán en cuenta los créditos correspondientes cuando las mencionadas asignaturas estén dedicadas en su totalidad a la traducción jurídica y/o económica, debiendo quedar esta característica suficientemente acreditada por los programas correspondientes a dichas asignaturas. En caso de existir en los planes de estudio de las Universidades varios tipos de traducción especializada, deberá figurar necesariamente en la certificación académica personal, junto a la denominación de la asignatura, el tipo de traducción especializada que haya cursado el solicitante. Los créditos en interpretación deberán corresponder a asignaturas troncales, obligatorias u optativas y las asignaturas deberán haberse cursado exclusivamente con la combinación lingüística lengua B, castellano, debiendo quedar estas características suficientemente acreditadas por los programas correspondientes a dichas asignaturas.

Sólo se admitirá un máximo de cuatro créditos por asignaturas de Traducción o Interpretación de libre elección.

Tanto los 24 créditos en Traducción Jurídica y/o Económica como los 16 créditos en Interpretación deberán referirse necesariamente a la lengua extranjera para la que se solicite el nombramiento en combinación con el castellano, lo que deberá acreditarse en la certificación académica personal, debiéndose especificar necesariamente, junto a la denominación de las asignaturas, las lenguas A y B correspondientes.

Tercero.—Los créditos a que se refiere el apartado anterior deberán acreditarse mediante la certificación académica personal de la Universidad correspondiente, expedida a nombre del solicitante y firmada por la autoridad académica universitaria competente, en la que consten todas las materias cursadas en la licenciatura, especificando, junto a la denominación de cada asignatura, las lenguas de trabajo A y B correspondientes.

Las Universidades deberán enviar a la Oficina de Interpretación de Lenguas al comienzo de cada año académico los programas de todas las asignaturas correspondientes a la licenciatura, en los que deberán figurar el código y el tipo de asignatura, el número de créditos y las horas lectivas correspondientes, las lenguas de trabajo, y el nombre del Profesor que las imparte.

Cuarto.—Documentación necesaria para la tramitación de las solicitudes. La documentación necesaria para solicitar y obtener, en su caso, el nombramiento de Intérprete Jurado en los supuestos previstos en los apartados anteriores, será:

Tres fotografías tamaño carné.

Fotocopia compulsada del documento de identidad o pasaporte.

Fotocopia compulsada del título de Licenciado o del resguardo de solicitud de expedición del mismo.

Certificación académica personal original, en la que consten, junto a la denominación de las asignaturas, las lenguas de trabajo A y B correspondientes.

En los casos en que se hayan cursado las asignaturas necesarias para la obtención del nombramiento antes de la entrada en vigor de la presente Orden, deberán aportar los programas correspondientes los propios solicitantes, debidamente refrendados por la autoridad académica universitaria competente.

Por lo que se refiere a las titulaciones extranjeras homologadas, se deberá aportar además:

Una certificación académica personal original expedida por la Universidad extranjera en la que se haya obtenido el título.

El plan de estudios correspondiente a los años en que se cursó la licenciatura.

Los programas de las asignaturas de traducción e interpretación válidas para la obtención del nombramiento, correspondientes al año en que se cursaron, debidamente refrendados por la autoridad académica universitaria competente.

Si la solicitud o la documentación presentadas fueran incompletas o no reunieran los requisitos establecidos en la presente Orden, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se dictará resolución en la que, a la vista de la circunstancia producida y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le tendrá por desistido de su petición.

Quinto.—En lo referente a la expedición del nombramiento y del carné acreditativo, así como a la inscripción de sus titulares en el Registro de Intérpretes Jurados de la Oficina de Interpretación de Lenguas, serán de aplicación, en su integridad, los artículos 7 y 8 de la Orden de este Ministerio de 8 de febrero de 1996, por la que se dictan normas sobre los exámenes para nombramiento de Intérpretes Jurados.

Sexto.—Aquellos que, a la entrada en vigor de la presente Orden, se encuentren cursando el segundo ciclo de la Licenciatura en Traducción e Interpretación, podrán acogerse a la posibilidad, prevista en el apartado segundo de la Orden de 21 de marzo de 1997, de obtener hasta un máximo de 12 de los 24 créditos requeridos en Traducción Jurídica y/o Económica mediante la realización de prácticas en empresas, debidamente tuteladas y avaladas por la Universidad, y/o el proyecto de fin de carrera, siempre que consistan en la traducción de textos jurídicos y/o económicos y sin que se tengan en cuenta los trabajos que versen sobre aspectos teóricos de la traducción. En todo lo demás les será de aplicación la presente Orden.

Las solicitudes que estén en trámite a la entrada en vigor de la presente Orden, así como aquellas que, aun presentadas con posterioridad a dicha fecha, correspondan a Licenciados en Traducción e Interpretación que hubieran obtenido su título con anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden, se tramitarán conforme al procedimiento y requisitos establecidos en la Orden de 21 de marzo de 1997.

Séptimo.—Queda derogada, con las salvedades establecidas en el apartado anterior, la Orden de este Ministerio de 21 de marzo de 1997, por la que se desarrolla el artículo 15.2 del Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas.

Octavo.—La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 12 de julio de 2002.

PALACIO VALLELERSUNDI

Excmos. Sres. Subsecretario y Secretario general técnico.

Anexo 3. Nombramiento de traductor/a o intérprete jurado/a al catalán (ORDRE CLT/101/2003, de 26 de febrer, sobre l'adaptació del procediment de sol·licitud de nomenament de traductor/a o intèrpret jurat/ada al català i del català a altres llengües a la realització per sistemes telemàtics)

ORDRE CLT/101/2003, de 26 de febrer, sobre l'adaptació del procediment de sol·licitud de nomenament de traductor/a o intèrpret jurat/ada al català i del català a altres llengües a la realització per sistemes telemàtics

El Decret 119/2000, de 20 de març, de traducció i interpretació jurades, regula les sol·licituds de nomenament de traductor/a o intèrpret jurat/ada al català i del català a altres llengües.

Dins del pla d'actuació e-Europe 2002 de les Comunitats Europees, la Generalitat de Catalunya va endegar, mitjançant acord de 13 de juliol de 1999, el projecte d'Administració Oberta de Catalunya, amb la finalitat d'apropar els seus serveis al ciutadà mitjançant la utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

El Departament de Cultura amplia els canals d'informació i de prestació del servei de sol·licitud de nomenament de traductor/a o intèrpret jurat/ada al català i del català a altres amb la incorporació d'aquest servei a l'Administració Oberta de Catalunya. Per aquest motiu, i en aplicació de l'article 11 del Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l'Administració de la Generalitat mitjançant Internet, previ informe del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació sobre l'adequació tècnica dels programes i aplicacions, emès en compliment del que estableix l'article 4 del Decret 85/2002, de 19 de febrer, de creació de la Comissió de Coordinació Interdepartamental de Gestió de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions i l'informe de l'Assessoria Jurídica del Departament de Cultura,

Ordeno:

Article 1. Adaptació del procediment

El procediment de sol·licitud de nomenament de traductor/a o intèrpret jurat/ada al català i del català a altres llengües, que es regeix per la normativa vigent, s'adapta a les peculiaritats de la prestació de serveis utilitzant tècniques telemàtiques i telefòniques mitjançant les normes d'aquesta Ordre.

Article 2. Presentació de sol·licituds d'inscripció

2.1 Les sol·licituds de nomenament de traductor/a o intèrpret jurat/ada al català i del català a altres llengües es poden efectuar pels mitjans telemàtics i telefònics del portal de l'Administració Oberta de Catalunya.

2.2 Aquestes sol·licituds tenen els mateixos efectes jurídics que les efectuades per la resta de mitjans admesos en dret.

2.3 La sol·licitud efectuada per mitjans telemàtics o telefònics es considerarà presentada davant l'Administració quan s'enregistri en el registre telemàtic de l'Administració Oberta de Catalunya i constin a l'assentament d'entrada les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació del sol·licitant o del seu representant, identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud.

Article 3. El registre

L'únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de sol·licituds de nomenament de traductor/a o intèrpret jurat/ada al català i del català a altres llengües per mitjans telemàtics i telefònics és el registre telemàtic de l'Administració Oberta de Catalunya.

Article 4. Identificació i autenticació de la persona sol·licitant

4.1 La persona interessada a obtenir informació d'interès general sobre aquest servei pot accedir al portal de l'Administració Oberta de Catalunya sense identificar-se ni autenticar-se.

4.2 La persona interessada a presentar la sol·licitud i a conèixer-ne l'estat de tramitació ha d'identificar-se i d'autenticar-se de la forma següent:

a) Quan la comunicació s'estableix mitjançant l'accés al portal de l'Administració Oberta de Catalunya, la identificació s'efectua mitjançant el compte d'usuari i s'autentica mitjançant la contrasenya, que són propis, personals i intransferibles.

b) Quan la comunicació s'estableix telefònicament al centre telefònic del Portal de l'Administració Oberta de Catalunya, la identificació s'efectua mitjançant el seu compte d'usuari i s'autentica contestant les preguntes aleatòries formulades per l'operador que aportin la certesa sobre la coincidència entre la identitat de la persona interessada i la de l'interlocutor.

4.3 La persona interessada que utilitzi qualsevol del mitjans admesos en dret per sol·licitar aquest servei consent en el tractament de les seves dades de caràcter personal que sigui necessari per a la prestació del servei, i reconeix la validesa i eficàcia dels escrits, les sol·licituds i els documents telemàtics que siguin autenticats mitjançant els procediments establerts en l'apartat 2.

4.4 Per poder fer les gestions especificades a l'apartat 2, la persona interessada ha de tenir un compte d'usuari i una contrasenya, que s'han de sol·licitar d'acord amb el procediment establert.

Article 5. Presentació de documentació

Les persones que sol·liciten el nomenament de traductor/a o intèrpret jurat/ada al català i del català a altres llengües pels mitjans previstos en aquesta Ordre han de presentar en suport paper la documentació que estableix l'article 7.2 del Decret 119/2000, de 20 de març, de traducció i interpretació jurades, a qualsevol registre dels admesos legalment d'acord amb l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 6. Còmput de terminis

La presentació de sol·licituds per mitjans telemàtics o telefònics del portal de l'Administració Oberta de Catalunya es pot realitzar en qualsevol moment de l'any. Als efectes de còmput de terminis, la recepció en un dia inhàbil per a la Direcció General de Política Lingüística s'entén efectuada en el primer dia hàbil següent.

Article 7. Efectes de la presentació de les sol·licituds

7.1 D'acord amb el que estableix l'article 3.2 del Reial decret llei 14/1999, de 17 de setembre, de la signatura electrònica, l'Administració de la Generalitat de Catalunya reconeix la validesa i l'eficàcia dels escrits, sol·licituds i documents presentats telemàticament i de la informació comunicada telefònicament, sempre que es compleixin els mecanismes d'autenticació establerts a l'article 4 d'aquesta Ordre.

7.2 La persona interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud aportant la "confirmació de la recepció de la sol·licitud per part de l'Administració Oberta de Catalunya", que ha d'incorporar el número de registre d'entrada assignat des del

portal de l'Administració Oberta de Catalunya. Si la sol·licitud s'efectua telefònicament, l'òrgan gestor lliurarà a petició de la persona interessada aquesta confirmació mitjançant el suport que la persona interessada esculli.

Article 8. Sistema de consulta i seguiment de la tramitació

8.1 Un cop presentada la sol·licitud, la persona interessada pot consultar i fer el seguiment del seu expedient administratiu per qualsevol dels mitjans legalment establerts.

8.2 La persona interessada pot obtenir informació sobre la data de sol·licitud i l'estat de l'expedient administratiu corresponent.

8.3 L'habilitació del sistema de consulta i seguiment de la tramitació no eximeix a l'Administració de Generalitat de Catalunya d'efectuar les comunicacions i notificacions expressos establerts per la normativa vigent.

Article 9. Compromisos de servei

Els compromisos de servei per a aquests procediments són els que es fan públics a través del portal de l'Administració Oberta de Catalunya.

Aquests compromisos són els objectius de qualitat i eficiència en la prestació d'aquest servei i en cap cas comporten responsabilitats ni efectes jurídics per a l'òrgan gestor davant el ciutadà.

Article 10. Programes i aplicacions

S'aproven els programes i aplicacions mitjançant els quals es tramita telemàticament el procediment de sol·licitud de nomenament de traductor/a o intèrpret jurat/ada al català i del català a altres llengües, que estan disponibles en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de febrer de 2003

Jordi Vilajoana i Rovira

Conseller de Cultura

Anexo 4. Ley [CATALUÑA] 1/2015, 5 febrero, Distribución de competencias en relación con el occitano

Ley [CATALUÑA] 16/1990, 13 julio, derogada por la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 1/2015, 5 febrero, del régimen especial de Arán («D.O.G.C.» 13 febrero), el 14 de febrero de 2015.

Preámbulo

En el conjunto de Cataluña destaca por su propia personalidad Arán o el Valle de Arán, territorio ligado por la situación geográfica, por los orígenes históricos, por la lengua y por la cultura a las tierras gasconas y a la gran familia occitana, pero unida libremente, a través de pacto, al Principado de Cataluña. Desde 1175, el Valle pasó a formar parte de la Corona catalano-aragonesa por el Tratado de Amparanza

que los araneses estipularon con el rey Alfonso I. En 1313, los araneses decidieron por votación popular la permanencia del Valle en la Corona catalana-aragonesa, al mismo tiempo que Jaime II otorgó el conjunto de privilegios denominado Era Querimònia, verdadera carta magna de Arán, ratificada por todos los reyes hasta Fernando VII. En 1411, además, el Síndico de Arán ofreció la unión libre y pactada de Arán al Principado de Cataluña, cosa que el Parlamento catalán aceptó. El decreto de Nueva Planta de 1716, que suprimió las instituciones políticas de Cataluña, no afectó al régimen político-administrativo del Valle de Arán y, por eso, no fue éste incorporado a ninguno de los nuevos corregimientos en que se dividió el Principado. Hasta que en 1834 la Reina Gobernadora suprimió las instituciones tradicionales aranesas, hecho que culminó en una acción de fuerza del gobernador real Pascual Madoz que impuso en el Valle de Arán el nuevo régimen administrativo general del Estado.

La adhesión de los araneses a su lengua y, ante todo, su antiquísima tradición cultural y política han merecido que la Disposición Adicional primera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, recogiendo un deseo expresado por los araneses en el proceso de elaboración del Estatuto, haga un reconocimiento expreso de su peculiaridad y ordene un restablecimiento de la organización administrativa tradicional del Valle de Arán, debidamente actualizada.

La presente Ley pretende dar cumplimiento a dicho mandato estatutario restableciendo el Consejo General y el Síndico de Arán como principales instituciones de la organización administrativa propia del Valle de Arán. Al restablecer estas instituciones aranesas se realiza un acto de reparación histórica.

En este sentido, la presente Ley restituye a los araneses de manera actualizada una estructura administrativa que, sin perjuicio de la organización municipal, puede hacer posible la gestión más inmediata de las atribuciones que afectan directamente a los intereses peculiares del territorio, como son: el restablecimiento de la organización administrativa propia, la normalización, protección y enseñanza del aranés y la conservación de sus peculiaridades culturales, así como el establecimiento de un marco legal que le permita que el Consejo General pueda asumir las competencias que le delegue o asigne la Administración de la Generalidad de acuerdo con lo que establece la legislación vigente.

El Consejo General, como poder público, deberá promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que éste se integra sean reales y efectivas, y eliminar los obstáculos que impidan o dificulten su identidad o plenitud.

Anexo 5. Decreto 267/2002, de 13 de junio, La habilitación profesional para la traducción y la interpretación jurada de otras lenguas al gallego, y viceversa

I. DISPOSICIONES GENERALES

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA Decreto 267/2002, de 13 de junio, por el que se regula la habilitación profesional para la traducción y la interpretación jurada de otras lenguas al gallego, y viceversa. El Estatuto de autonomía de Galicia, en su artículo 5, les otorga al gallego y al castellano el carácter de lenguas oficiales que todos tienen el derecho de conocer y usar; y también establece que los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas y potenciarán el empleo del gallego en todos los planos de la vida pública, cultural e informativa, para lo que dispondrán de los medios necesarios para facilitar su conocimiento. Por otra parte, el artículo 27.20º determina que le corresponde a esta Comunidad la promoción y enseñanza de la lengua gallega. En esta línea, la Ley 3/1983, de normalización lingüística, contempla, en su artículo 2, que los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal del gallego y del castellano, como lenguas oficiales que son de la Comunidad Autónoma. De esta equiparación legal del gallego y del castellano se deriva la necesidad de contar con profesionales cualificados para la traducción y interpretación de otras lenguas al gallego, y viceversa. De ahí la conveniencia de regular la habilitación de estos especialistas, lo que facilitará, además, el uso del gallego en la documentación jurídica, administrativa y económica, y en los actos y procedimientos que deban tener efectos fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia, o que contengan actuaciones procedentes de fuera de su ámbito territorial. Por otra parte, la internacionalización de las relaciones sociales comporta, con frecuencia, la conveniencia de contar con traducciones fidedignas del gallego a otras lenguas, y viceversa; especialmente en textos y actuaciones en materia jurídica, administrativa y económica. Así pues, la necesidad de realizar versiones entre pares de lenguas, que surgen en la vida diaria en los ámbitos jurídico, administrativo y económico aconseja regular esta función. En primer lugar, porque existe la necesidad de disponer de un reconocimiento oficial de las traducciones e interpretaciones juradas al gallego, y de esta lengua a otras. En segundo lugar, con la finalidad de acreditar el nivel formativo de los profesionales dedicados a estas funciones, mediante las correspondientes pruebas en las que demuestren su nivel de aptitud -académica y formativa para obtener el nombramiento de traductor e intérprete jurado. Y finalmente, para reconocer reglamentariamente el hecho de que las facultades de traducción e interpretación prevén itinerarios específicos de traducción jurídico-administrativa y económica a los titulados en estas especializaciones.

En consecuencia, vistos los artículos 4.6º y 34.5º de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de la Xunta y su presidente, a propuesta del conselleiro de Educación y Ordenación Universitaria, de acuerdo con el dictamen del Consello Consultivo de Galicia y previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia en su reunión del día trece de junio de dos mil dos,

DISPONGO:

Artículo 1º.-Objeto.

1. Es objeto de este decreto la regulación de las habilitaciones profesionales para la traducción e interpretación jurada de otras lenguas al gallego, y viceversa.
2. La habilitación profesional a la que se refiere el apartado anterior se obtendrá mediante la superación de las pruebas reguladas en este decreto. También pueden obtener la habilitación las personas que reúnan los requisitos previstos en el artículo 7 del presente decreto.
3. Las habilitaciones para las modalidades de traducción y de interpretación son independientes una de otra.

Artículo 2º.-Carácter oficial de la traducción y de la interpretación.

1. Las traducciones y las interpretaciones que hagan las personas titulares de la habilitación profesional regulada en el presente decreto tienen carácter oficial.
2. Los profesionales de la traducción y de la interpretación jurada deben certificar, con su firma y sello, la fidelidad y la exactitud de sus actuaciones. La certificación y el sello deben ajustarse, literalmente, a los modelos que constan en el anexo 1.

Artículo 3º.-Destinatarios de las pruebas.

1. Las pruebas a las que se refiere el artículo 1.2º se dirigen a las personas que quieran obtener la habilitación de traducción o de interpretación jurada.
2. Pueden tomar parte en las pruebas las personas mayores de edad que posean, como mínimo, un título de diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente. Si se trata de un título extranjero, debe estar homologado.

Artículo 4º.-Convocatoria de las pruebas.

1. Las pruebas serán convocadas, con la periodicidad precisa, por la consellería competente en materia de política lingüística.
2. Las convocatorias deben indicar: a) Las lenguas objeto del examen. b) El plazo y el lugar de presentación de solicitudes, y también la documentación que se debe aportar. c) Las fechas de las pruebas y el lugar donde se realizarán. d) El importe

de la tasa.e) El lugar donde se publicarán las listas de personas admitidas y excluidas y los resultados de las pruebas. f) La composición del tribunal.

Artículo 5º.-Composición y funciones del tribunal evaluador.

1. El tribunal calificador de las pruebas de traducción e interpretación jurada lo componen los miembros siguientes: presidente, vicepresidente, secretario y dos vocales. Además, podrán nombrarse cuantos asesores se precisen. Todos ellos tendrán la condición de licenciado. El tribunal será nombrado por el titular de la consellería competente en la materia.

2. Las funciones del tribunal calificador son las siguientes: a) Diseño, elaboración, corrección y valoración de las pruebas específicas y comunes en los procedimientos convocados. b) Resolución de las reclamaciones presentadas. c) Aprobación de resultados y elevación de la correspondiente propuesta al órgano competente para resolver la convocatoria.

Artículo 6º.-Régimen de las pruebas.

1. Las pruebas se estructuran en pruebas comunes y pruebas específicas. Son pruebas comunes la de lengua gallega y la de derecho. Son pruebas específicas la de traducción directa e inversa y la de interpretación consecutiva de enlace. El contenido de las pruebas se describe en el anexo 2.

2. Estas pruebas tienen carácter eliminatorio. La calificación de apto en las pruebas comunes conserva sus efectos en las tres convocatorias sucesivas a la realizada.

Artículo 7º.-Habilitación directa.

1. Pueden solicitar el nombramiento, sin necesidad de convocatoria previa, las personas siguientes:

a) Las que posean el título de licenciado en Traducción e Interpretación, siempre que acrediten mediante certificación académica que cumplen los siguientes requisitos:

a.1) Que cursaron veinticuatro créditos de materias de traducción especializada durante la licenciatura y que cualquier posible combinación lingüística de todas y cada una de las materias cursadas de traducción especializada tenga el gallego como lengua a la que se traduce. Si no figura especificado de este modo en la denominación de la materia, se deberá adjuntar también un certificado del programa oficial, con la combinación lingüística de las materias cursadas.

a.2) Que doce de los veinticuatro créditos de las materias de traducción especializada cursada tienen como contenidos la traducción de textos jurídicos y económicos. Si estos contenidos no figuraran especificados en alguna de las materias, se deberá adjuntar un certificado del programa oficial de la materia

correspondiente al curso escolar en que se hubiera cursado, en el que tendrán que aparecer especificados aquellos contenidos. El resto de los créditos, hasta los veinticuatro, se pueden obtener mediante la realización de prácticas en empresas avaladas y tuteladas por la universidad correspondiente, a través de los proyectos de fin de carrera o memorias de traducción; o a través de materias, incluidas las de tercer ciclo, siempre que estén relacionadas directamente con la traducción de textos jurídico-administrativos o económicos.

a.3) Que cursaron 12 créditos de interpretación. b) Las que posean el nombramiento de intérprete jurado de gallego, expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Artículo 8º.-Nombramiento.

1. El titular de la consellería competente en la materia, a propuesta del director general de Política Lingüística, resolverá el nombramiento como traductor o intérprete jurado de aquellas personas que hayan superado las pruebas reguladas en este decreto y de las que proceda su habilitación directa, por estar comprendidas en alguno de los epígrafes del artículo 7.

2. Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el conselleiro que la dictó, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Diario Oficial de Galicia, según lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o bien directamente, el recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

3. Este nombramiento dará lugar a la inscripción en el registro, que se regula en el artículo siguiente.

Artículo 9º.-Registro de Traductores e Intérpretes Jurados Habilitados.

1. La Dirección General de Política Lingüística llevará el Registro de Traductores e Intérpretes Jurados Habilitados para esta función, en el que se inscribirán las personas nombradas traductor o intérprete jurado al gallego, y del gallego a otras lenguas.

2. Los datos que deben figurar en el registro son: nombre y apellidos, NIF, fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfono, número de registro, fecha de alta en el registro, tipo de alta (habilitación directa o mediante convocatoria), titulación, modalidad de la habilitación (traducción/interpretación) y lengua o lenguas.

3. El cambio de cualquiera de estos datos debe ser comunicado por el interesado, para su asentamiento en el registro.

4. Los datos del registro son públicos.

Artículo 10º.-Carnet acreditativo.

1. La consellería competente, a través de la Dirección General de Política Lingüística, expedirá el carnet acreditativo a nombre de la persona que tenga la habilitación para la traducción o interpretación jurada, según el modelo que consta en el anexo 3.

2. El carnet acreditativo debe elaborarse a través de procedimientos y con materiales que garanticen su autenticidad y durabilidad.

Disposición adicional Única.-La consellería competente será la que tenga asignadas las atribuciones en materia de política lingüística.

Disposición final Única.-Se faculta a la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo previsto en este decreto. Santiago de Compostela, trece de junio de dos mil dos. Manuel Fraga Iribarne Presidente Celso Currás Fernández Conselleiro de Educación y Ordenación Universitaria

ANEXO I

Modelos de certificado y sello Certificado.

(Nombre y apellidos), como (traductor/a y/o intérprete jurado/a) de (lengua),

Certifico: que esta traducción al (lengua de destino) es completa y fiel a su documento original redactado en (lengua de origen). Y, para que así conste, firmo este certificado, (Localidad y fecha). (Sello). (Firma). Sello. En el sello deben figurar, sin ningún tipo de añadido o símbolo, los datos siguientes:

1. Nombre y apellidos del traductor o intérprete jurado.
2. Número de registro.
3. NIF.
4. Lenguas y modalidades para las que está habilitado.
5. Dirección y teléfono.

ANEXO II

Contenido de las pruebas

Prueba de lengua gallega.

Objetivo general.

El objetivo de la prueba es que el examinando demuestre tener un dominio práctico de la lengua gallega que, al hacer una traducción o una interpretación, le permita utilizarla de una forma correcta en el gallego normativizado.

Objetivos específicos.

El examinado debe mostrar que tiene un conocimiento de grado superior de la lengua en los aspectos siguientes: Ortografía: el examinando debe demostrar que tiene un dominio completo de la ortografía, tanto en lo relativo a las reglas generales como a las reglas particulares y excepcionales. Morfosintaxis: el examinando debe demostrar que tiene un dominio completo de la morfología y de la sintaxis, tanto en lo relativo a las reglas generales como a las reglas particulares y a las excepcionales. Léxico y fraseología: el examinando debe demostrar un conocimiento amplio del léxico general y de la fraseología, propios del gallego normativizado.

Contenido.

1. Ortografía:

1.1. El vocalismo. La representación de los fonemas del gallego. El acento diacrítico.

1.2. El consonantismo. La representación gráfica de los fonemas consonánticos del gallego. La representación de las consonantes nasales. Los distintos valores del grafema x. La representación gráfica de los grupos cultos.

1.3. El acento. Aplicaciones de las reglas de acentuación.

1.4. Uso de la diéresis.

1.5. Uso del trazo o guión.

1.6. Uso de mayúsculas y minúsculas.

1.7. Uso de abreviaturas.

2. Morfosintaxis.

2.1. Los artículos. Los alomorfos de los artículos. Las contracciones. Usos de los artículos.

2.2. Los determinantes y pronombres posesivos. Formas especiales. Usos y valores especiales de los posesivos. Los posesivos distributivos.

2.3. Los determinantes y pronombres demostrativos. Amalgamas y contracciones.

2.4. Determinantes y pronombres indefinidos. Los cuantificadores e identificadores.

- 2.5. El género del sustantivo y del adjetivo. La formación del femenino.
- 2.6. El número del sustantivo y del adjetivo. La formación del plural.
- 2.7. El verbo: las conjugaciones regulares e irregulares.
- 2.8. Usos de los tiempos y de los modos verbales.
- 2.9. Casos especiales de verbos transitivos, intransitivos y pronominales.
- 2.10. Verbos de régimen preposicional.
- 2.11. Uso de las formas impersonales (infinitivo impersonal, gerundio y participio). El infinitivo personal o conjugado.
- 2.12. La construcción en pasiva.
- 2.13. Las perífrasis verbales.
- 2.14. Los pronombres personales. Formas tónicas y átonas. Las amalgamas de los pronombres. El pronombre de solidaridad. La colocación de las formas átonas.
- 2.15. Pronombres relativos e interrogativos.
- 2.16. Adverbios: aspectos sintácticos y morfológicos.
- 2.17. Preposiciones. Formas y usos.
- 2.18. Conjunciones de coordinación y subordinación.
- 3. Los signos de puntuación. Su uso correcto.
- 4. Léxico y fraseología. Teniendo en cuenta la finalidad de la prueba, se pedirá el conocimiento y uso correcto del léxico y de la fraseología general, propios del gallego normativizado.
 - 4.1. Precisión léxica: uso del léxico y de la fraseología más adecuado en cada contexto.
 - 4.2. Locuciones adverbiales, prepositivas y conjuntivas.
 - 4.3. Las expresiones fijadas y frases hechas.
 - 4.4. Sinónimos y antónimos.
 - 4.5. Corrección de interferencias léxicas y fraseológicas de otras lenguas.
- Prueba de derecho.
- Objetivo.

Comprobar que los aspirantes al certificado poseen un conocimiento general del ordenamiento jurídico, suficiente para traducir los textos jurídicos.

Contenidos.

I) Instituciones jurídicas básicas en el Estado español.

1. El ordenamiento jurídico y la organización de los poderes del Estado.

a) Concepto de ordenamiento jurídico. b) La Constitución. Los tratados internacionales. c) La ley. Las normas con rango de ley: decreto-ley y decreto legislativo. d) El reglamento. e) Los principios generales del derecho. f) La costumbre. g) El poder legislativo i) El poder ejecutivo. j) El poder judicial. 2. El jefe del Estado. La monarquía.

3. Los órganos legislativos y ejecutivos del Estado.

a) Las Cortes españolas: el Congreso y el Senado. b) Órganos auxiliares: el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. c) El Gobierno. Composición y funciones. d) El presidente del Gobierno. e) El Consejo de Ministros. f) Los ministros. g) Las comisiones delegadas del Gobierno.

4. El Parlamento y el Gobierno de Galicia.

a) El Parlamento de Galicia. b) El Valedor do Pobo y el Consello de Contas. c) El presidente de la Xunta de Galicia. e) El Consello da Xunta. f) Los conselleiros.

5. La organización judicial. Estructura.

a) El Tribunal Constitucional. b) El Tribunal Supremo. c) La Audiencia Nacional. d) El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. e) Las audiencias provinciales. f) Los juzgados de primera instancia, de instrucción y del contencioso administrativo. g) Los juzgados de paz. h) El gobierno del poder judicial: el Consello Xeral do Poder Xudicial.

6. La organización territorial del Estado: Estado, comunidades autónomas y entidades locales.

a) Las formas de organización de los estados: estados unitarios y estados descentralizados. b) El Estado de las autonomías. Las comunidades autónomas: organización y competencias. c) La Administración local.

7. La organización de la Administración pública.

a) Los órganos de la Administración pública: órganos centrales y periféricos. b) La Administración institucional o instrumental: organismos autónomos, sociedades estatales y otros entes públicos. La empresa pública. c) Los colegios profesionales y las cámaras oficiales.

8. Principales instituciones de derecho civil.

a) Persona (personas físicas y jurídicas. El estado civil. La capacidad. El Registro civil). b) Familia (matrimonio, separación y divorcio; la pareja estable; filiación natural y adoptiva; instituciones de protección: la potestad del padre y de la madre y la tutela). c) Sucesión (sucesión testada: el testamento; sucesión intestada y sucesión contractual). d) Contratos (principales figuras contractuales: la donación, la compraventa, los arrendamientos, el préstamo, la sociedad).

9. Principales instituciones de derecho mercantil.

a) Concepto de empresa y de empresario. El Registro Mercantil. b) Las sociedades (anónimas, limitadas, cooperativas, etc.). c) Los títulos valores (la letra y el cheque). d) Derecho mercantil especial (bursátil, bancario, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia, del seguro, derecho marítimo, derecho de los consumidores y usuarios).

10. Principales instituciones de derecho laboral.

a) Concepto de trabajador. b) El contrato de trabajo: concepto, clases y extinción. c) Las asociaciones empresariales y los sindicatos de trabajadores. d) La autonomía colectiva: los convenios colectivos. e) Los conflictos colectivos: la huelga y el cierre patronal o lock out. f) La justicia laboral: los órganos administrativos arbitrales y los tribunales laborales.

11. Principales instituciones del derecho propio de la actividad de la Administración.

a) El derecho administrativo como derecho propio de la actividad de la Administración. b) El procedimiento administrativo: iniciación, instrucción, finalización. Recursos administrativos. c) La gestión de los servicios públicos.

12. Los documentos públicos y privados.

a) La documentación notarial (matrices, copias autorizadas, copia simple, testigos y legitimaciones). b) Las resoluciones judiciales: sentencia y auto. c) Las resoluciones administrativas: notificaciones y certificaciones. d) El Registro de la propiedad mercantil: publicidad material y publicidad formal. e) La documentación extranjera: la legalización diplomática y el Convenio de la Haya.

II) Instituciones jurídicas básicas de la comunidad internacional.

1. Los tratados internacionales.

a) Concepto y clases. b) La Carta de las Naciones Unidas. c) Los tratados internacionales relativos a la protección de los derechos humanos: la Declaración

Universal de los Derechos Humanos. El Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

2. Las organizaciones internacionales.

a) De ámbito universal. La ONU. Organización y funciones. b) De ámbito regional. De cooperación preferentemente política. El Consejo de Europa. De cooperación preferente militar. La OTAN. De cooperación preferentemente económica. La OCDE.

III) Instituciones jurídicas básicas de la Unión Europea.

1. Los tratados constitutivos: el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Ámsterdam. Los tratados constitutivos de las comunidades europeas (CECA, CEE, CEEA).

2. Los objetivos de la Unión Europea.

a) Los objetivos de la Unión Europea: la PESC, la cooperación en asuntos de justicia e interior y la ciudadanía europea. b) Los objetivos de la Comunidad Europea: el mercado común y las libertades comunitarias. c) Los fondos estructurales. El FEDER. El FEOGA. El Fondo Social de Cohesión.

3. Instituciones y órganos de las comunidades europeas.

a) El Consejo. El COREPER. b) La Comisión. c) El Parlamento Europeo. d) El Tribunal de Justicia. e) El Tribunal de Cuentas. f) Los órganos auxiliares: el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones y el Banco Europeo de Inversiones.

4. El sistema jurídico comunitario.

a) Los actos normativos típicos: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. b) Las relaciones del derecho comunitario con los derechos internos de los países miembros.

5. Perspectivas de futuro.

IV) Legislación sobre la lengua gallega.

1. La lengua gallega en la Constitución española y en el Estatuto de autonomía de Galicia. La Ley de normalización lingüística.

2. La lengua gallega en la Administración.

a) Administración y función pública. b) Administración local. c) Administración de justicia. d) Administración militar.

3. Legislación de lengua gallega en las actividades comerciales y mercantiles.

Estructura de la prueba.

La prueba consta de una batería de 40 preguntas de respuesta múltiple con tres respuestas alternativas sobre contenidos expresados en este epígrafe. Prueba de traducción. Objetivo general. El objetivo general de esta prueba es evaluar los conocimientos y las capacidades necesarias para traducir textos del ámbito jurídico, administrativo o socioeconómico o textos formales no literarios.

Estructura de la prueba.

La prueba se estructura en las siguientes áreas:

Área 1/Traducción directa:

Consta de una traducción al gallego de un texto del ámbito jurídico, administrativo o socioeconómico, o de un texto formal no literario.

Área 2/Traducción inversa:

Consta de una traducción del gallego a la lengua elegida por el examinando de un texto del ámbito jurídico, administrativo o socioeconómico o de un texto formal no literario.

Área 3/Preguntas sobre cuestiones lingüísticas:

Se trata de justificar y de argumentar las soluciones que el examinando haya dado a puntos concretos de la traducción.

Prueba de interpretación.

Objetivo general.

El objetivo general de esta prueba es evaluar los conocimientos y las capacidades necesarias para hacer una traducción de enlace entre dos sujetos, lo que comporta tanto la traducción consecutiva directa como la inversa.

Estructura de la prueba.

Esta prueba consiste en traducir un fragmento de la conversación entre un juez, fiscal o abogado y un declarante en una vista oral o en una declaración, a partir de ver la conversación registrada en vídeo. Después de cada intervención, el examinando deberá traducirla oralmente. La prueba se estructura en las siguientes áreas:

a) Área1/Dominio de las técnicas de interpretación:

Se evalúa el conocimiento y la aplicación correcta de las técnicas de interpretación (comprensión y reproducción).

b) Área2/Nivel de lengua gallega:

Se evalúa la fluidez, la pronunciación y entonación, la morfosintaxis y el vocabulario, de acuerdo con el estándar oral.

c) Área3/Nivel de la lengua objeto de interpretación:

Se evalúa la fluidez, la pronunciación y la entonación, la morfosintaxis y el vocabulario.

ANEXO III

Datos del carnet.

En el anverso del carnet de traducción e interpretación jurada deben constar los siguientes datos:

Logotipo de la Xunta de Galicia.

Nombre y apellidos y fotografía del titular.

DNI o pasaporte o tarjeta de residencia de la UE.

En el reverso debe constar:

Número de inscripción en el Registro de la persona titular.

Habilitación de la lengua o lenguas.

Modalidad (traducción/interpretación).

Fecha de inscripción.

Firma del director general de Política Lingüística.

Anexo 6. Transposición de la Directiva Europea 2010/64

PROYECTO DE LEY

121/000114 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(121) Proyecto de Ley.

Autor: Gobierno.

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

Acuerdo:

Encomendar Dictamen, conforme al artículo 109 del Reglamento, a la Comisión de Justicia. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles, que finaliza el día 23 de septiembre de 2014.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2014.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA TRANSPONER LA DIRECTIVA 2010/64/UE, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010, RELATIVA AL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES Y LA DIRECTIVA 2012/13/UE, DE 22 DE MAYO DE 2012, RELATIVA AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES

Exposición de motivos

I

La presente ley tiene por objeto la transposición a nuestro ordenamiento interno de la Directiva 2010/64/ UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

La transposición de estas Directivas, que desarrollan dos aspectos esenciales de la defensa en el proceso penal, exige la modificación parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y conlleva un importante refuerzo de las garantías del proceso penal, mediante una regulación detallada del derecho a la traducción e interpretación en este proceso y del derecho del imputado a ser informado sobre el

objeto del proceso penal de modo que permita un eficaz ejercicio del derecho a la defensa.

II

En cuanto al contenido y estructura de la ley, consta de tres artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. En el artículo primero, que se encuentra dividido en nueve apartados, se efectúa la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para proceder a la transposición de la Directiva 2010/64/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales. En el artículo segundo, dividido en cinco apartados, se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incorporar a nuestro derecho interno la Directiva 2012/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

III

El derecho a traducción e interpretación para aquellas personas que no hablan o no entienden la lengua del procedimiento se consagra en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según la interpretación efectuada por la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal facilitarán la aplicación de este derecho, garantizando el derecho del imputado o acusado a la interpretación y traducción en los procesos penales, así como el derecho a un juicio equitativo.

El derecho del imputado o acusado a ser asistido por un intérprete se extiende a todas las actuaciones en las que sea necesaria su presencia, incluyendo el interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas judiciales. A fin de preparar la defensa, también tendrá derecho a servirse de un intérprete en las comunicaciones con su Abogado que guardan relación directa con cualquier interrogatorio o vista judicial durante el proceso, o con la presentación de un recurso u otras solicitudes procesales.

El derecho a interpretación o traducción requiere además que se le facilite la traducción de los documentos esenciales, o al menos los pasajes pertinentes de dichos documentos. Tal y como se indica en la Directiva 2010/64/UE, determinados documentos, como son las resoluciones por las que se priva a una persona de su libertad, los escritos de acusación o las sentencias, se consideran siempre documentos esenciales, por lo que se han recogido expresamente en el nuevo artículo 123.1.d) que se introduce en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La nueva regulación recoge que la traducción deberá hacerse en un plazo razonable, en consonancia con las exigencias del artículo 3 de la Directiva europea, y se posibilita el uso de las nuevas tecnologías para efectuar la interpretación,

salvo que la presencia física del intérprete resulte necesaria para salvaguardar los derechos del imputado o acusado.

También se garantiza el derecho a recurrir la decisión por la que se deniegue el derecho a la interpretación o a la traducción, mediante la documentación por escrito de la decisión judicial, así como la posibilidad de hacer constar en acta la protesta durante el juicio oral, lo que permitirá la interposición de los recursos correspondientes.

Los intérpretes o traductores judiciales serán designados entre aquellos incluidos en los listados elaborados por la Administración, facilitándose en casos de urgencia que otra persona conocedora del idioma, que se estime capacitada para esta tarea, pueda ser habilitada como intérprete o traductor eventual. Todo este sistema se refuerza mediante la habilitación al Juez o al Ministerio Fiscal, para realizar las comprobaciones necesarias en aquellos casos en los que aprecie que la traducción o interpretación no ofrecen las garantías suficientes.

IV

El derecho a la información de las personas detenidas y de los imputados o acusados en el proceso penal se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según la interpretación efectuada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal facilitarán la aplicación de este derecho, garantizando el derecho a la libertad y el derecho a un juicio equitativo.

Por esta razón, se modifica el actual artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se regula el derecho de defensa, señalándose de forma clara y precisa que toda persona a la que se impute un acto punible tendrá derecho a ser informada de los hechos que se le imputan, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y en los hechos imputados; derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa; derecho a designar libremente Abogado; derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla; derecho a la traducción e interpretación gratuitas; derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo y del derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

El derecho a la información de los detenidos o presos se regula en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precepto ya recoge la mayor parte de derechos a los que hace referencia la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo, relativa al derecho de información en los procesos penales. Ahora bien, resultaba necesario completar el catálogo de derechos para adaptarlo a los postulados de la normativa europea, haciendo mención expresa, entre otros, al derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de

la detención o privación de libertad; derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, así como a la información del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la Autoridad Judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención.

Especial mención merece el derecho de acceso al expediente. Cuando se trata de imputados, se ha considerado conveniente su incorporación en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en su artículo 302 se han recogido las excepciones a este derecho. Como se ha anticipado, en los casos del detenido o privado de libertad, el derecho de acceso se ha recogido en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y su alcance se limita, por exigencia de la normativa europea, a aquellos elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. Se trata de proporcionar, con anterioridad a la interposición del recurso, únicamente, aquella información que sea fundamental para que sea posible valorar la legalidad de la detención o privación de libertad. En cuanto a la forma en la que la información ha de ser suministrada, una adecuada garantía de los derechos recogidos en los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos exige que sea proporcionada en un lenguaje accesible, adaptado a la edad, grado de madurez, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal del imputado o detenido. Además, en los casos de los detenidos o presos, la información de los derechos que le asisten deberá efectuarse siempre por escrito.

También el momento en el que se suministra la información constituye un mecanismo de garantía de los derechos citados. Así, los imputados deberán recibirla sin demora injustificada y, en los casos de los detenidos o presos, la información deberá ser suministrada de forma inmediata.

V

Con el objeto de adaptar la habilitación para actuar como intérprete en el juicio oral, se modifica el apartado 5 del artículo 231 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, introduciendo una remisión a la normativa reguladora de cada proceso.

VI

Con las modificaciones normativas operadas, se asegurará un nivel uniforme de protección de los derechos procesales en los diversos países de la Unión Europea y, con ello, se reforzará la confianza entre los Estados Miembros de la Unión Europea, que resulta imprescindible para potenciar los instrumentos de reconocimiento mutuo que, de forma creciente, se están convirtiendo en una herramienta esencial de cooperación.

Esta Ley se convierte, por lo tanto, en un instrumento de mejora global de nuestro proceso penal desde la perspectiva del acusado o imputado, detenido o preso, incidiendo en aspectos esenciales del derecho a la defensa.

VII

Esta Ley incide directamente en el artículo 24 de la Constitución Española, introduciendo cambios jurídicos, procesales y sustantivos que afectan al ámbito propio de las Leyes Orgánicas, al desarrollar derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en este precepto constitucional.

Tal y como se detalla en la disposición final primera, tienen carácter orgánico los artículos 118, 123, 126, 505 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en tanto afectan a una parte del núcleo esencial de los derechos a obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de derechos e intereses legítimos ante los Tribunales sin que pueda producirse indefensión; derecho a ser informado sobre la acusación; derecho a un proceso público con todas las garantías y derecho de defensa, recogidos en el artículo 24 de la Constitución Española, en relación con lo dispuesto en el artículo 81 de la Norma Fundamental.

VIII

La Ley incorpora una disposición adicional que se refiere a la creación de un Registro de traductores e intérpretes judiciales, como mecanismo necesario para garantizar la adecuada realización de esta tarea, que es fundamental para el desarrollo de los procesos, por parte de estos profesionales; se trata de una actuación derivada también del contenido de la Directiva 2010/64/UE, sobre el derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales; las normas de funcionamiento de este Registro de traductores e intérpretes judiciales, que se creará mediante Ley, serán establecidas reglamentariamente.

Artículo 124.

1. El traductor o intérprete judicial será designado de entre aquellos que hallen incluidos en los listados elaborados por la Administración competente. Excepcionalmente, en aquellos supuestos que requieran la presencia urgente de un traductor o de un intérprete, y no sea posible la intervención de un traductor o de un intérprete judicial inscrito en las listas elaboradas por la Administración, en su caso, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo anterior, se podrá habilitar como intérprete o traductor judicial eventual a otra persona conocedora del idioma empleado que se estime capacitado para el desempeño de dicha tarea.

Anexo 7. Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, por la que se dictan normas sobre los exámenes para la obtención del título de Traductor-Intérprete Jurado.

Ante las modificaciones en la denominación y en el procedimiento de nombramiento de los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as introducidas por el Real Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, aprobado por Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, y la Orden AEC/2287/2012, de 18 de octubre, por la que se aprueban las normas de gestión y los modelos de impreso para el pago de las tasas por admisión a pruebas selectivas para obtención del nombramiento de Traductor-Intérprete Jurado, por la tramitación y expedición del título, y por la expedición del carné de Traductor-Intérprete Jurado, resulta necesaria la derogación de la Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se dictan normas sobre los exámenes para nombramiento de Intérpretes Jurados y su sustitución por la presente Orden, que incorpora las modificaciones citadas.

En su virtud, y de acuerdo con la habilitación prevista en la disposición final segunda del Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, dispongo:

Artículo 1. Requisitos para participar en los exámenes.

1. Los interesados en participar en los exámenes para la obtención del título de Traductor/a-Intérprete Jurado/a deben reunir los siguientes requisitos:

- a) Ser mayor de edad.
- b) Tener la nacionalidad española o de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
- c) Poseer un título español de Graduado o Licenciado, o un título extranjero que haya sido homologado a alguno de aquéllos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2. Los requisitos indicados en el apartado anterior deben concurrir el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes de admisión y subsistir en el momento del nombramiento.

Artículo 2. Convocatorias.

1. Los exámenes para la obtención del título de Traductor/a-Intérprete Jurado/a se convocarán por resolución del Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

2. En la convocatoria se establecerá:

- a) El plazo y forma de presentación de solicitudes de admisión;
- b) los idiomas que se convocan;
- c) la composición del Tribunal;
- d) el importe que los solicitantes deberán satisfacer en concepto de derechos de examen por cada uno de los idiomas de los que soliciten examinarse, y,
- e) como anexo, se incluirá el temario de las materias sobre las que versará el primer ejercicio.

3. La solicitud de admisión, en la que constarán, al menos, nombre, apellidos, edad, domicilio y número del documento nacional de identidad o del pasaporte del candidato y titulación que posee, se formalizará en el modelo 790, código 010, irá dirigida al Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación y se presentará en el Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo será posible la presentación de la solicitud utilizando los medios electrónicos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, a través del Registro Electrónico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

4. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación dictará resolución, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en la que se indicará el lugar y fecha de celebración de los exámenes y los lugares en que se expondrán las listas de admitidos y de excluidos provisionales para que, en un plazo de diez días hábiles, puedan subsanar los posibles errores u omisiones. Expirado este plazo de diez días, se publicará en el Boletín Oficial del Estado la relación definitiva de admitidos y excluidos.

Artículo 3. Tribunal.

1. El Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación designará, entre funcionarios del Cuerpo de Traductores e Intérpretes, el Tribunal calificador, titular y suplente, que estarán compuestos por un número impar de miembros, no inferior a tres. A los mismos se podrán incorporar los asesores que en cada caso el Tribunal estime pertinente.

2. Los miembros y asesores del Tribunal calificador tendrán derecho a la percepción de las asistencias previstas en el artículo 29 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. A estos efectos, el Tribunal calificador tendrá la categoría primera de las recogidas en el artículo 30.1 del mencionado Real Decreto.

3. El funcionamiento, decisiones y resoluciones del Tribunal podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 4. Exámenes.

1. Los exámenes para la obtención del título de Traductor/a-Intérprete Jurado/a constarán de los tres ejercicios que a continuación se describen.

2. El primero consistirá en un examen tipo test, de carácter gramatical y terminológico, sobre las materias comprendidas en el temario que se publicará como anexo a la convocatoria. El ejercicio se calificará de «apto» o «no apto» y sólo podrán pasar al ejercicio siguiente los aspirantes que hubieran obtenido la calificación de apto. El tribunal hará pública la lista de los aspirantes declarados «aptos» o «no aptos» y convocará simultáneamente a aquéllos a la realización del segundo ejercicio. Entre la convocatoria al segundo ejercicio y la fecha de realización del mismo deberá mediar, como mínimo, una semana.

3. El segundo ejercicio comprenderá tres pruebas, todas ellas eliminatorias, por lo que los aspirantes deberán obtener en todas y cada una de ellas la calificación de «apto»:

a) La primera prueba consistirá en la traducción al castellano, sin diccionario, de un texto de carácter general de tipo literario, periodístico o ensayístico en la lengua a cuyo nombramiento se aspira.

b) La segunda prueba consistirá en la traducción a la lengua a cuyo nombramiento se aspira, sin diccionario, de un texto en castellano, de carácter general de tipo literario, periodístico o ensayístico.

c) La tercera prueba consistirá en la traducción al castellano, con diccionario, de un texto de carácter jurídico o económico de la lengua a cuyo nombramiento se aspira. En esta prueba no se permitirá el uso de diccionarios electrónicos.

El tribunal hará pública la lista de aquellos que hayan sido declarados «aptos», esto es, que hayan superado las tres pruebas, y les convocará simultáneamente a la realización del tercer ejercicio. Entre la convocatoria al tercer ejercicio y la fecha de realización del mismo deberá mediar, como mínimo, una semana.

4. El tercer ejercicio será de carácter oral. Este ejercicio, que comprenderá una prueba de interpretación consecutiva y, si el tribunal lo considera oportuno, un diálogo con el aspirante en la lengua elegida, permitirá a aquél verificar el dominio y comprensión de las lenguas de partida y de llegada por parte del candidato.
5. La corrección de todas las pruebas se basará en criterios publicados previamente a la celebración de las mismas.
6. Las listas de aspirantes que hayan superado cada prueba se publicarán en el tablón de anuncios de la sede del Tribunal, así como en las páginas web www.exteriores.gob.es y 060.es
7. La lista definitiva de aprobados se publicará en el Boletín Oficial del Estado además de en los lugares indicados anteriormente.

Artículo 5. Expedición del título.

1. Para la expedición del título de Traductor/a-Intérprete Jurado/a los aspirantes que superen los exámenes deberán presentar, en el plazo de 20 días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la lista de aprobados en el Boletín Oficial del Estado, bien en el Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación o bien en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los siguientes documentos:

- a) Fotocopia compulsada del título exigido para concurrir a los exámenes o de la credencial de la homologación a título o a Grado si se trata de un título extranjero.
- b) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad o pasaporte.

En el supuesto de titulares del Documento Nacional de Identidad español o de un título universitario expedido en España, la presentación de las fotocopias de esos documentos podrá sustituirse por la autorización para la consulta de las correspondientes bases de datos de la Administración del Estado. De no poder realizarse la consulta por razones técnicas o no dar la consulta resultados positivos, la Oficina de Interpretación de Lenguas requerirá al interesado para que aporte copia compulsada del documento de que se trate, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Quienes, dentro del plazo indicado y salvo caso de fuerza mayor, no presentasen la documentación requerida o de la misma se dedujese que no cumplen alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados Traductores/as-Intérpretes Jurados/as, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

3. Corresponde a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la expedición del título de Traductor/a-Intérprete Jurado/a del idioma o idiomas correspondiente, que será válido en todo el territorio nacional.

4. El título de Traductor/a-Intérprete Jurado/a no confiere a su titular la condición de funcionario público ni supone el establecimiento de ningún vínculo orgánico ni laboral con la Administración General del Estado.

Artículo 6. Inscripción en el Registro de Traductores/as-Intérpretes Jurados/as del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

1. Corresponde a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la inscripción del nombramiento en el Registro de Traductores/as-Intérpretes Jurados/as.

2. Una vez efectuada la inscripción, la Oficina de Interpretación de Lenguas remitirá a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma en que resida el Traductor/a-Intérprete Jurado/a, o al Consulado correspondiente en caso de residir en el extranjero, el original del título para su entrega al interesado, así como dos fichas de registro de firma, a fin de que éste estampe su firma y sello en las mismas. Dichas fichas, tras su firma por el interesado, serán devueltas a la Oficina de Interpretación de Lenguas.

3. A los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se les asignará un número de Traductor/a-Intérprete Jurado/a, que figurará en su título, en el sello y en su carné acreditativo. Este número será único para cada persona, independientemente de los idiomas para cuya traducción e interpretación esté habilitada.

4. Los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as estarán obligados a poner en conocimiento de la Oficina de Interpretación de Lenguas toda variación en sus datos de contacto a través de los medios que se dispongan a tal fin.

Artículo 7. Lista de Traductores/as-Intérpretes Jurados/as.

1. Tal y como establece el artículo 11 del Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, aprobado por el Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, con carácter periódico y a efectos informativos, la Oficina de Interpretación de Lenguas publicará y mantendrá actualizada una lista con los nombres y apellidos de todos los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as que hayan sido nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación hasta esa fecha. En dicha lista figurarán los idiomas para los que han sido habilitados, la fecha de nombramiento, la vía de acceso al título y su número de Traductor/a-Intérprete Jurado/a. Siempre que el

Traductor/a-Intérprete Jurado/a así lo comunique a través de los medios que se dispongan a tal fin, figurarán, asimismo, sus datos de contacto y si se encuentra en ejercicio activo.

2. El tratamiento de dichos datos se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 8. Sello y certificación.

1. Los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as podrán certificar con su firma y sello, cuando así les sea solicitado, la fidelidad y exactitud de sus actuaciones.

2. En el sello deberán figurar necesaria y exclusivamente, en castellano y sin adición de ninguna otra mención o símbolo, los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos del Traductor/a-Intérprete Jurado/a.

b) Idioma o idiomas para cuya traducción e interpretación ha sido habilitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

c) Número de Traductor/a-Intérprete Jurado/a.

3. En todo caso, el contenido del sello deberá ajustarse al modelo que figura en el anexo I.

4. Para certificar la exactitud de sus actuaciones, los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as deberán emplear la fórmula que se indica en el anexo II, en la que se hará constar el idioma del texto de origen, el idioma al que se ha efectuado la traducción, el lugar de realización de la misma y la fecha. La fórmula deberá ser necesariamente la que figura en dicho anexo; no obstante, junto a la misma podrá figurar su traducción al idioma de que se trate, siempre y cuando dicha traducción se ajuste literalmente a la original en español.

5. A efectos de la comprobación de la autenticidad del original a partir del cual se ha efectuado la traducción, deberá acompañarse copia del mismo, sellado y fechado en todas sus páginas.

Artículo 9. Carné acreditativo.

1. A cada Traductor/a-Intérprete Jurado/a se le expedirá, previa solicitud del mismo y abono de la tasa correspondiente, un único carné acreditativo, en el que constarán los siguientes datos:

a) Una fotografía del titular.

b) Su nombre y apellidos.

- c) Su número de DNI o de pasaporte de un Estado miembro de la UE o del EEE.
- d) El número único de registro.
- e) Su nacionalidad.
- f) El idioma o idiomas para los que esté autorizado.
- g) La fecha (o fechas) de nombramiento.

2. El modelo de carné es el que se recoge en el anexo III.

3. Toda ampliación del número de idiomas dará lugar a la expedición de un nuevo carné acreditativo, previa presentación de la correspondiente solicitud, de la devolución del anterior carnet y de la acreditación del pago de las tasas correspondientes.

4. Corresponde a la Oficina de Interpretación de Lenguas la expedición y remisión del carné a la Delegación del Gobierno o Consulado correspondiente con el fin de que sea entregado al interesado.

5. Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo 790 (TASA POR LA EXPEDICIÓN, SUSTITUCIÓN, DUPLICACIÓN O MODIFICACIÓN DEL CARNÉ DE TRADUCTOR/A - INTERPRETE JURADO/A) Código 039 y el abono de la oportuna tasa, con la correspondiente Validación del pago por la Entidad colaboradora.

Cuando el pago de la tasa a que se refiere el párrafo anterior se haya efectuado desde el extranjero, el abono de la misma deberá acreditarse mediante la presentación del comprobante bancario de haber satisfecho su importe mediante su ingreso en la Cuenta Restringida para la Recaudación de Tasas en el Extranjero, número 0182-2370-47-0200107974, que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación mantiene en el BBVA, con arreglo al artículo 3, in fine, de la Orden AEC/2287/2012, de 18 de octubre, por la que se aprueban las normas de gestión y los modelos de impreso para el pago de las tasas por admisión a pruebas selectivas para obtención del nombramiento de Traductor-Intérprete Jurado, por la tramitación y expedición del título, y por la expedición del carné de Traductor-Intérprete Jurado.

Artículo 10. Tasas.

Será de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional única de la Ley 9/2011, de 10 de mayo, de Tasas Consulares, sobre Tasa por la tramitación y, en su caso, expedición del título de Traductor/a-Intérprete Jurado/a y de expedición del carné y en la Orden AEC/2287/2012, de 18 de octubre.

Disposición adicional única. Aplicación del contenido de los artículos 1 a 4 a los solicitantes del título de Traductor/a-Intérprete Jurado/a por la vía de la exención de examen.

Los artículos 1 a 4, ambos incluidos, de la presente Orden no serán de aplicación a quienes soliciten el título de Traductor/a-Intérprete Jurado/a con exención de examen, al amparo de la disposición transitoria segunda del Real Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre, sin perjuicio de su normativa específica.

Disposición transitoria primera. Sello de Traductor/a-Intérprete Jurado/a.

Los sellos elaborados conforme al apartado 6 del artículo 7 de la Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se dictan normas sobre los exámenes para nombramiento de Intérpretes Jurados, seguirán teniendo validez durante los dos años siguientes a la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», plazo durante el cual deberán haber sido modificados para adaptarse a las disposiciones de la misma.

Disposición transitoria segunda. Carné de Traductor/a-Intérprete Jurado/a.

Durante un plazo de cinco años a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as podrán solicitar a la Oficina de Interpretación de Lenguas el canje de sus carnés antiguos. Finalizado dicho plazo expirará la validez de cuantos no hayan sido canjeados.

Disposición derogatoria única.

- Queda derogada la Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se dictan normas sobre los exámenes para nombramiento de Intérpretes Jurados.
- Quedan derogados los artículos quinto y sexto de la Orden AEX/1971/2002, de 12 de julio, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para la obtención del nombramiento de Intérprete Jurado por los Licenciados en Traducción e Interpretación.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 6 de noviembre de 2014.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo Marfil.

ANEXO I**Sello**

(NOMBRE Y APELLIDOS) Traductor/a-Intérprete Jurado/a de (IDIOMA) N.º (NÚMERO DE T/I JURADO)

ANEXO II**Certificación**

«Don/Doña (nombre y apellidos),
Traductor/a-Intérprete Jurado/a de (idioma) nombrado/a por
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, certifica que la que antecede
es traducción fiel y completa al (lengua de destino)
de un documento redactado en (lengua de origen).

En (lugar), a (fecha)»

Firma.

Anexo 8. Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se desarrolla el artículo 15.2 del Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas

El Real Decreto 79/1996, de 26 de enero, modificó el artículo 15 del Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se regula, entre otros aspectos, el nombramiento de Intérpretes jurados, estableciendo que podrán solicitar este nombramiento, sin necesidad de realizar los exámenes previstos en el artículo 14 del propio Real Decreto, las personas que se encuentren en posesión del título español de licenciado en Traducción e Interpretación, o de un título extranjero que haya sido homologado a éste, siempre que acrediten, mediante la correspondiente certificación académica, que han superado las asignaturas de dicha licenciatura que, conforme a los planes de estudio de las correspondientes Facultades, otorguen a los licenciados «una preparación específica en traducción jurídica y económica e interpretación oral en la lengua o lenguas para las que se solicite el nombramiento».

El Real Decreto no reconoce, por tanto, a dichos licenciados el derecho a acceder automáticamente al nombramiento de Intérpretes jurados, sino que les exige que acrediten que han recibido, a lo largo de la licenciatura, una formación suficiente en traducción jurídica y económica e interpretación oral.

Dado que el Real Decreto no establece los criterios para determinar qué se entiende por «preparación específica» en dichas materias, se hace preciso dictar una Orden al amparo de la habilitación concedida por la disposición final primera de aquél, en la que, previa consulta a los sectores académicos y profesionales interesados, se precise dicho concepto y se determinen, en consecuencia, los requisitos que han de reunir los licenciados en Traducción e Interpretación que quieran obtener el nombramiento de Intérprete jurado sin realizar los exámenes habituales.

En su virtud, en uso de la habilitación prevista en la disposición final primera del Real Decreto 79/1996, de 26 de enero, vengo a disponer:

Primero.-De conformidad con lo establecido en el artículo 15.2 del Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, según la redacción dada al mismo por el Real Decreto 79/1996, de 26 de enero, las personas que se encuentren en posesión del título español de licenciado en Traducción e Interpretación, o de un título extranjero que haya sido homologado a éste, podrán obtener, sin necesidad de realizar los exámenes previstos en el artículo 14 del citado Real Decreto, el nombramiento de Intérprete jurado, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

- a) Poseer la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro del espacio económico europeo.
- b) Acreditar, mediante la correspondiente certificación académica, que han superado las asignaturas de la licenciatura en Traducción e Interpretación o titulación extranjera equivalente debidamente homologada, que, conforme a los planes de estudio de las correspondientes Facultades, otorguen a los licenciados una preparación específica en traducción jurídica y económica e interpretación oral en la lengua o lenguas para las que se solicite el nombramiento.
- c) En el supuesto de títulos extranjeros homologados correspondientes a sistemas educativos de países en los que el español no sea la lengua oficial, acreditar que una de las lenguas estudiadas es el español.

Segundo.-A efectos de lo dispuesto en el párrafo b) del apartado anterior, se entenderá que los solicitantes poseen una preparación específica en las materias indicadas si han obtenido, en los cursos propios de la licenciatura, un mínimo de 24 créditos en traducción jurídica y económica y de 16 créditos en interpretación.

De los 24 créditos en traducción jurídica y económica, al menos 12 deberán corresponder a asignaturas denominadas específicamente «Traducción Jurídica

y/o Económica» o a asignaturas denominadas «Traducción Especializada» cuya correspondencia con aquellas materias esté avalada por los programas de dichas asignaturas.

Los restantes créditos, hasta el total de 24, podrán obtenerse mediante la realización de prácticas en empresas, debidamente tuteladas y avaladas por la Universidad, y/o del proyecto de fin de carrera, siempre que esté directamente relacionado con la traducción de textos jurídicos o económicos. A estos efectos no se tendrán en cuenta los trabajos que versen sobre aspectos teóricos de la traducción.

Estos 24 créditos deberán referirse necesariamente a cada una de las lenguas extranjeras para las que se solicite el nombramiento y siempre en combinación con el castellano.

Tercero.-Los créditos a que se refiere el apartado anterior deberán acreditarse mediante un certificado de la Universidad correspondiente expedido a nombre del solicitante y firmado por la autoridad académica universitaria competente, en el que conste el número total de créditos obtenido en las materias exigidas, especificando los que corresponden a cada asignatura y, en su caso, a cursos convalidados realizados en el extranjero, prácticas en empresas y proyecto de fin de carrera.

Los solicitantes que estuviesen en posesión de un título extranjero homologado al título español de licenciado en Traducción e Interpretación, deberán presentar el certificado a que se refiere el párrafo anterior expedido por la Universidad extranjera en la que hubiesen obtenido el citado título.

Cuarto.-Los que, a la entrada en vigor de la presente Orden, no reunieran el número de créditos exigido en el apartado segundo de la misma, por haber finalizado ya los estudios de la licenciatura en Traducción e Interpretación o encontrarse en el segundo ciclo de la misma, podrán obtenerlos cursando, en Universidades públicas o privadas reconocidas, asignaturas de especialización en traducción jurídica y económica y/o interpretación oral.

Los que se acojan a lo dispuesto en el párrafo precedente deberán solicitar el nombramiento de Intérprete jurado antes del 31 de diciembre de 1999, acreditando, en la forma establecida en el apartado tercero de esta Orden, que han obtenido, antes de dicha fecha, el número de créditos necesarios.

Quinto.-El procedimiento para solicitar y obtener, en su caso, el nombramiento de Intérprete jurado en los supuestos previstos en los apartados anteriores, será el regulado en los artículos 5, 7 y 8 de la Orden de este Ministerio de 8 de febrero de 1996, por la que se dictan normas sobre los exámenes para nombramiento de Intérpretes jurados.

Sexto.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de marzo de 1997.

MATUTES JUAN

Excmos. Sres. Subsecretario y Secretario general técnico.

II. RED VÉRTICE

Anexo 1. Carta de Red Vértice al Ministerio de Justicia: Hacia un nuevo modelo de gestión de la traducción y la interpretación judicial

1. Modelo de gestión actual

La interpretación judicial constituye un elemento de comunicación esencial ante un tribunal para los ciudadanos extranjeros sin el cual no es posible realizar el derecho a un juicio equitativo. Por ello el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagran y exigen la asistencia de un intérprete como elemento cardinal de un proceso judicial. En España la jurisprudencia ha señalado expresamente que dicho derecho se ha de entender enmarcado en los artículos 17.3 y 24 de la Constitución Española y, en ese sentido, el Tribunal Supremo ha entendido que «la facilitación de un intérprete que asegure la comunicación entre el imputado y su defensor debe considerarse integrada en el derecho constitucional a la defensa y a la asistencia de letrado.» La Directiva 2010/64/UE de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, pendiente de transposición, viene a profundizar en esta garantía procesal.

No obstante, la realización de semejante derecho fundamental puede quedar vaciada de contenido si no se dispone de los medios adecuados. El sistema actual de subcontratación y externalización de los servicios de traducción e interpretación ha ido en detrimento de la calidad del servicio. Las causas son múltiples pero se pueden sintetizar en tres puntos:

a. La existencia de un intermediario, una mercantil de naturaleza privada, que persigue generar y maximizar sus beneficios. Ello conlleva que una parte sustancial

del presupuesto no se destine a las labores de traducción e interpretación sino a los beneficios de la mercantil.

b. Los intermediarios han aprovechado las lagunas legales para contratar a personas inexpertas que están dispuestas a realizar labores de traducción e interpretación por una fracción de lo que cobra un intérprete o traductor profesional. No existen pruebas de acceso mediante las cuales se puedan comprobar las competencias profesionales de los intérpretes y traductores.

c. Las mercantiles cobran por horas de servicio prestado pero contratan asimismo para los idiomas mayoritarios a empleados sin la debida formación que trabajan en plantilla.

A modo de ejemplo de lo que sucede en las Comunidades en las que el servicio se subcontrata, adjuntamos como Anexo 1 un artículo del Heraldo de Aragón en el que se comprueba claramente que una parte sustancial del presupuesto se destina a engrosar los beneficios de la mercantil.

El modelo de subcontratación y la ausencia de unas pruebas de competencia para poder intervenir como intérprete o traductor han provocado que los servicios de traducción e interpretación se estén realizando por personas sin formación alguna, afectando plenamente a los derechos de los ciudadanos y justiciables. La configuración de los servicios de traducción e interpretación que se prestan en los tribunales españoles es de tal índole que en la actualidad no se puede garantizar que en todos los procedimientos se guarden los derechos fundamentales que la Constitución Española establece o que el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales señala.

Del mismo modo, resulta incuestionable que el actual modelo no optimiza los recursos públicos, ya que los medios se destinan en parte al lucro de una entidad privada. La parte de los recursos destinada finalmente a pagar a los intérpretes y traductores no garantiza la calidad de los mismos, puesto que no pueden dedicarse a la actividad de traducción e interpretación como medio principal de subsistencia. Si todos los recursos empleados por la Administración se destinaran en su totalidad a la contratación de los intérpretes y traductores, éstos se dedicarían a esta actividad diariamente, como se explica en el artículo del Anexo 1, de manera que estarían fidelizados y profesionalizados, y dados de alta debidamente como profesionales autónomos, con la clara repercusión económica de ingresos fiscales en las arcas del Estado. Entendemos que el sistema de subcontratación es incompatible, por tanto, con cualquier principio de racionalización económica.

2. Modelo de gestión propuesto por las asociaciones profesionales firmantes

Desde las asociaciones profesionales firmantes se propone por ello la supresión de cualquier intermediario con ánimo de lucro y que la gestión del servicio le sea encomendada directamente a la Administración Pública o, en su defecto, a un

órgano autónomo sin ánimo de lucro. De igual forma, la entidad administrativa o el órgano autónomo sin ánimo de lucro ha de ser el autorizado para comprobar y controlar la capacidad y competencia del intérprete o traductor judicial.

a. Gestión directa del servicio por parte de la Administración Pública mediante la creación de una Oficina de Traducción e Interpretación dependiente del Ministerio de Justicia. La supresión de los intermediarios repercutiría en un ahorro de los gastos y en un aumento de la retribución de los intérpretes y traductores. En Austria se ha encomendado la gestión de los servicios de traducción e interpretación a la Justizbetreuungsagentur (JBA) o Agencia de Asistencia Judicial.

b. Encomienda de la gestión a un medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración Pública mediante la creación de un Instituto de Servicios de Traducción e Interpretación independiente, con capacidad para prestar servicio a toda la Administración de Justicia, tanto estatal como autonómica.

La naturaleza de dicho Instituto dependería de los requisitos establecidos por parte de la Administración Pública, y se adaptaría a las necesidades y las obligaciones legales. No obstante, entendemos que es esencial la ausencia del ánimo de lucro en aras de evitar situaciones como las actuales. Una gestión eficiente puede ofrecer un servicio de calidad a la par que economizar el mismo.

En la actualidad, no existe una entidad que disponga de los recursos necesarios para poder prestar el servicio, si bien los traductores e intérpretes pueden proceder de las asociaciones abajo firmantes.

3. Control de acceso a la profesión y verificación de competencia profesional

En último lugar, desde las asociaciones profesionales firmantes se entiende que existe una imperante necesidad de establecer un control de acceso y de comprobación de los requisitos profesionales de los intérpretes y traductores judiciales. Por ello se propone que la entidad gestora de los servicios de traducción e interpretación regule en colaboración con las asociaciones profesionales firmantes y con la máxima autoridad en interpretación y traducción del país, la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, el acceso de los profesionales al ejercicio de la profesión, contando también con el asesoramiento de expertos académicos en la formación de traductores e intérpretes judiciales.

Es necesario que se convoque a representantes de estas asociaciones profesionales en calidad de expertos para asesorar en las cuestiones de transposición de la directiva comunitaria, y proponemos asimismo que se cree un registro nacional de intérpretes y traductores debidamente acreditados para ejercer la profesión en el ámbito judicial, tal como se establece en dicha directiva.

A modo de ejemplo, exponemos a continuación las características principales del modelo implantado en Austria. Aunque obviamente no proponemos emular la totalidad de este modelo, proporciona una idea de cómo se gestiona en otros países de la Unión.

En Austria el acceso a la profesión se ha regulado mediante ley (SDG - Bundesgesetz über die allgemein beeidigten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen und Dolmetscher 1975, I 2009/30) y establece los siguientes requisitos de acceso:

- 5 años de experiencia como intérprete inmediatamente previa a la solicitud.
- 2 años si el solicitante dispone de un título universitario en Traducción e Interpretación
- Superación de un examen oral que incluye conocimientos de Derecho austriaco (tanto material como procesal)
- Suscripción de un seguro de Responsabilidad Civil con una cuantía mínima de 400.000 EUR.

El tribunal examinador se compone de un mínimo de tres personas: un juez y dos expertos independientes y cualificados que han de pertenecer a la Asociación Austriaca de Intérpretes Judiciales (ÖVGJ). Uno de los dos expertos ha de serlo del idioma que se examina.

Sobre la base de los diferentes modelos ya existentes en la Unión Europea, como el modelo austríaco anterior, el modelo noruego o el británico, las asociaciones abajo firmantes colaborarían con la Oficina de Interpretación de Lenguas y el Ministerio de Justicia en el diseño de las pruebas del nuevo registro. Para la realización del examen de acceso en cualquiera de los idiomas mayoritarios sería obligatorio poseer titulación universitaria, y se eximiría del examen a los candidatos que posean la acreditación de traductor-intérprete jurado. También, como en el modelo austríaco, se podría fijar un equivalente suficiente de experiencia profesional debidamente acreditada para la realización del examen. En el caso de los idiomas minoritarios, las asociaciones profesionales firmantes gestionarían junto con las universidades la realización y organización de cursos de técnicas de interpretación no vinculados a un idioma en concreto para asegurar un estándar mínimo de los intérpretes y traductores de otras lenguas, así como cursos de actualización sobre aspectos jurídico-procesales.

Todos los intérpretes y traductores habrían de acatar el código deontológico establecido por el ente gestor con el consenso de las asociaciones profesionales firmantes y el Ministerio de Justicia. Al recibir la acreditación correspondiente, los intérpretes y traductores deberían realizar el juramento o promesa de acatar dicho código deontológico.

El anterior sistema aseguraría la profesionalidad de los intérpretes y traductores, y unos criterios que garantizarían la calidad del servicio. Esto redundaría en beneficio de los justiciables, convirtiendo en una realidad la garantía procesal del derecho a un intérprete o traductor judicial.

En Barcelona, a 9 de junio de 2012

Firmado por Sonsoles Plaza Blázquez en calidad de Presidenta de APTIJ (Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados).

Firmado por Carmen Montes Cano en calidad de vocal de ACE Traductores (Sección Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación Colegial de Escritores de España).

Firmado por Patricia Buján Otero en calidad de Presidenta de AGPTI (Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación).

Firmado por Alejandro Caffarini en calidad de presidente de AICE (Asociación de Intérpretes de Conferencia de España).

Firmado por M^a Cecilia Avanceña Villasol en calidad de Titular de Capítulo – España de AIPTI (Asociación Internacional de Profesionales de la Traducción y la Interpretación).

Firmado por Jose Luis Díez Lerma en calidad de Presidente en funciones de APTIC (Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya).

Firmado por Graham Rhodes en calidad de Vocal de Relaciones Externas de ASATI (Asociación Aragonesa de Traductores e Intérpretes).

Firmado por Elena Pérez Ramírez en calidad de Presidenta de Asetrad (Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes).

Firmado por Josep Peñarroja Fa en calidad de Presidente de ATIJC (Asociación de Traductores e Intérpretes Jurados de Cataluña).

Firmado por Natalia Gascón Schäfer en calidad de vocal de ATRAE (Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España).

Firmado por Beatriz Benítez Castro en calidad de vicepresidenta de UniCo (Unión de Correctores).

Firmado por Romain Gilbert HANN en calidad de Presidente de la Xarxa (Red de traductores e intérpretes de la Comunidad Valenciana).

Anexo 2. Comunicado APTIJ-Vértice (07/07/14)

La Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales, Jurados y Policiales (APTIJ) y la Red Vértice de asociaciones de profesionales de la traducción, interpretación y corrección desean expresar su total desacuerdo con las manifestaciones públicas de representantes del Ministerio de Justicia en lo referente a la transposición de la Directiva 2010/64 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales. Si bien coincidimos en identificar la creación de un Registro de Traductores e Intérpretes Judiciales como la pieza clave para la aplicación de la citada directiva, cuyo plazo de transposición acabó en octubre de 2013, disentimos completamente sobre la concepción de registro que el Ministerio pretende llevar a la práctica. Ante dichas manifestaciones, las asociaciones han aportado enfoques alternativos que no se han visto reflejados en los planteamientos del ministerio.

En la actualidad los servicios de traducción e interpretación de los juzgados y la policía, a pesar de que existe una plantilla de traductores e intérpretes tanto en Justicia como en Interior, se vienen prestando en su inmensa mayoría a través de la subcontratación de estos servicios a empresas adjudicatarias. Hemos denunciado este hecho en numerosas ocasiones como una dejación de responsabilidad de la Administración, un perjuicio para los derechos de los ciudadanos y un ataque directo a la profesionalidad del sector, puesto que las condiciones laborales se han visto gravemente mermadas en las sucesivas licitaciones que se han producido, por lo que ya no se puede garantizar la calidad del servicio prestado, mientras el gasto de las Administraciones se ha multiplicado exponencialmente. La escasa o nula consideración que los derechos civiles merecen a las empresas adjudicatarias de estas licitaciones queda demostrada por su sistema de selección de personal: últimamente aparecen anuncios en portales de búsqueda de empleo pidiendo literalmente «traductores sin estudios» para trabajar en los juzgados y la policía y ser incluidos en la bolsa de «traductores oficiales».

Según declara, el Ministerio de Justicia tiene intención de sancionar esta situación con la creación del mencionado Registro de Traductores e Intérpretes Judiciales, necesario para cumplir con la directiva comunitaria, de dos maneras:

1) Omitiendo la organización de pruebas de acceso al registro conforme a parámetros de validez, objetividad y fiabilidad, y sustituyéndolas por unos requisitos formales de experiencia y en el mejor de los casos de titulación, que ya aparecen hoy en día en los pliegos de licitación de estas empresas, y cuyo cumplimiento efectivo es imposible de verificar por parte de la Administración.

Todos los registros de intérpretes y traductores jurados actualmente existentes, tanto el central del MAEC como los de las comunidades autónomas con

competencias para ello, tienen pruebas de acceso como puerta de entrada al registro. También el resto de países comunitarios que cuentan con registros de intérpretes y traductores judiciales y policiales realizan pruebas de acceso. El CGPJ, en su informe al Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de las Víctimas del Delito (ley en la que el Ministerio de Justicia quiere transponer la citada Directiva) de 31 de enero de 2014, ya alerta sobre la insuficiencia de los requisitos planteados para garantizar la calidad que recomienda la Directiva.

2) Incluyendo a personas jurídicas en el registro, es decir, a las empresas adjudicatarias que publican el tipo de anuncios mencionado. Esto va en contra del espíritu y la letra de la Directiva, cuyo propósito principal es establecer unos baremos mínimos de calidad de la traducción y la interpretación en los procesos penales, y para ello insta a crear «registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados», y en ningún caso contempla la creación de directorios de empresas.

Por todo ello, la citada asociación y la Red Vértice, que se han reunido con el equipo del Ministerio de Justicia encargado de la transposición de la Directiva en varias ocasiones, desean poner de manifiesto que este proyecto de Registro incumple flagrantemente la Directiva y va en contra de todo el asesoramiento recibido por parte del sector de la traducción y la interpretación profesional. Asimismo, desean denunciar que su puesta en práctica en absoluto proporcionará una base para la consecución de los objetivos de calidad de la Directiva 2010/64. Esta pretendida calidad sólo será posible si el acceso a la profesión se realiza mediante la superación de pruebas objetivas, válidas y fiables, como se ha venido reiterando continuamente al Ministerio de Justicia.

<http://www.redvertice.org/>

@Red_Vertice

Firmado por Carmen Montes Cano en calidad de vocal de ACE Traductores (Sección Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación Colegial de Escritores de España).

Firmado por Patricia Buján Otero en calidad de Presidenta de AGPTI (Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación).

Firmado por Alejandro Caffarini en calidad de presidente de AICE (Asociación de Intérpretes de Conferencia de España).

Firmado por M^a Cecilia Avanceña Villasol en calidad de Titular de Capítulo – España de AIPTI (Asociación Internacional de Profesionales de la Traducción y la Interpretación).

Firmado por Jose Luis Díez Lerma en calidad de Presidente en funciones de APTIC (Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya).

Firmado por Graham Rhodes en calidad de Vocal de Relaciones Externas de ASATI (Asociación Aragonesa de Traductores e Intérpretes).

Firmado por Elena Pérez Ramírez en calidad de Presidenta de Asetrad (Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes).

Firmado por Josep Peñarroja Fa en calidad de Presidente de ATIJC (Asociación de Traductores e Intérpretes Jurados de Cataluña).

Firmado por Natalia Gascón Schäfer en calidad de vocal de ATRAE (Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España).

Firmado por Beatriz Benítez Castro en calidad de vicepresidenta de UniCo (Unión de Correctores).

Firmado por Romain Gilbert HANN en calidad de Presidente de la Xarxa (Red de traductores e intérpretes de la Comunidad Valenciana).

Anexo 3. Red Vértice se reúne con los ponentes del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal³³

El pasado día 16 de octubre, la Comisión de la Red Vértice encargada del seguimiento de la transposición de la Directiva 2010/64 del Parlamento Europeo y del Consejo del 20 de octubre del 2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, se reunió con el ponente del proyecto de ley orgánica del título, el Portavoz del G.P. Popular en la Comisión Mixta para la Unión Europea don Pablo Casado, y con los dos componentes, doña Marta González, Portavoz del G.P. Popular en la Comisión de Igualdad y don Daniel Serrano, Portavoz del G.P. Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores.

A dicha reunión se convocaron asimismo a la Conferencia de Centros y Departamentos Universitarios de Traducción e Interpretación (CCDUTI), a la Asociación de Formadores, Investigadores y Profesionales de Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (AFIPTISP) y a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).

En ella, las asociaciones profesionales y académicas transmitieron a los diputados sus inquietudes en relación con la redacción actual del proyecto de ley orgánica, centrándose en los siguientes aspectos:

³³ Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo, relativa al derecho a información en los procesos penales

- la necesidad de que este recoja la superación de un examen o prueba debidamente diseñado como condición de inscripción en el Registro Oficial de Traductores e Intérpretes judiciales o penales al que el propio proyecto alude;
- la necesidad de definir con más precisión los casos excepcionales a los que se refiere en el nuevo art. 124.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según la redacción del proyecto de ley orgánica;
- la necesidad de que la nueva ley orgánica derogue de forma explícita los artículos 398, 440, 441, 442 y 762.8 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal actualmente vigentes, y enmiende artículo 231.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de evitar dar, en el futuro, cobertura legal a la práctica actual de permitir que «cualquier persona» conocedora de la lengua de que se trate intervenga como traductor o intérprete en los procesos penales; y
- la necesidad de suprimir del proyecto su Disposición final segunda, que prohíbe que su aplicación suponga un aumento de dotaciones o gastos de personal, por ser incoherente con el carácter orgánico y procesal de la nueva ley.

Los interlocutores tomaron buena nota de todas estas sugerencias, felicitando a las asociaciones autoras por el espíritu constructivo con el que las habían presentado y comprometiéndose a estudiarlas, y en la medida de lo posible consensuarlas, tanto con el resto de los componentes de la Comisión de Justicia del Congreso como con el servicio correspondiente del Ministerio de Justicia.

Madrid, 22 de octubre de 2014

Anexo 4. Modelo carta diputados_18.09.14

Excmo. Sr

Grupo

Palacio del Congreso de los Diputados

Plaza de las Cortes,s/n

28071 MADRID

Madrid, 18 de septiembre de 2014

Asunto: propuesta de emmiendas de las asociaciones profesionales e traductores al Proyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la transposición de la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

Excmo. Sr.....:

En el Consejo de Ministros celebrado el 1 de agosto pasado, se acordó trasladar a Las Cortes el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

Las asociaciones abajo indicadas, miembros de la Red Vértice de asociaciones de traductores, correctores e intérpretes con presencia en España, se congratulan de que el gobierno haya dado curso a la transposición de la Directiva 2010/64, incorporando a la normativa nacional sus disposiciones principales, entre ellas, la creación de un registro oficial de traductores e intérpretes judiciales, uno de los puntales de la directiva.

No obstante, encontramos en la redacción del proyecto cuatro aspectos técnico-jurídicos que consideramos mejorables, en aras de la plena consecución de uno de los objetivos recogidos en la Exposición de motivos, que no es otro que el de reforzar «las garantías del proceso penal, mediante una regulación detallada del derecho a la traducción e interpretación en este proceso».

En primer lugar, parece haber cierta desconexión entre lo que se interpreta como la intención del proyecto y su materialización en las redacciones propuestas para los artículos 123.1 a), 124.1 y la Disposición adicional única. En la primera se prevé que los acusados o imputados tendrán «derecho a ser asistidos por un intérprete... durante todas las actuaciones en que sea necesaria su presencia, incluyendo el interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas judiciales», mientras que en la segunda se indica que «el traductor o intérprete judicial será designado de entre aquellos que hallen incluidos en los listados elaborados por la Administración competente», omitiendo toda referencia a la fase policial. Finalmente, la tercera establece que la inscripción en el registro oficial de traductores e intérpretes «será requisito necesario para la actuación de estos profesionales por designación del Juez o del Secretario judicial ante la Administración de Justicia...». Pensamos que el texto resultaría más coherente y más fiel al espíritu de la norma si se especificara claramente que la asistencia lingüística a la que se refiere ha de ser prestada por los profesionales inscritos en el registro en cualquier caso, trátase de diligencias policiales o judiciales propiamente dichas.

El segundo aspecto mejorable que hemos identificado se encuentra en el segundo

párrafo de la Disposición adicional única, en el que se afirma que «A efectos de proceder a la inscripción en este Registro Oficial, el Ministerio de Justicia podrá solicitar el cumplimiento de otros requisitos diferentes a la formación o titulación que se establezca reglamentariamente en función del idioma de que se trate. Estos requisitos deberán ser proporcionados y no discriminatorios y podrán basarse en la experiencia del profesional, en el conocimiento adicional de cuestiones procedimentales o jurídicas, y en el cumplimiento de deberes deontológicos previstos en la Ley.»

Nos parece significativo que la disposición contenga referencias a la «formación o titulación que se establezca reglamentariamente», así como a la «experiencia del profesional» y ninguna a un examen o prueba. Si bien puede entenderse que para determinadas combinaciones lingüísticas se apliquen excepciones sobre la titulación requerida para acceder al examen, no hay motivo para eximir a ningún candidato de dicha prueba. Uno de los problemas que se pretende evitar con esta nueva norma, por ejemplo, es que haya intérpretes judiciales y policiales que realicen su trabajo sin tener siquiera unos conocimientos adecuados de español (o de la lengua oficial utilizada durante el proceso), tal y como sucede en la actualidad. De ahí nuestra inquietud para con la redacción actual de la disposición en cuestión, ya que omite este extremo de importancia tan primordial. Si el registro ha de cumplir el objetivo pretendido con su creación, ha de establecerse como vía indispensable de acceso la superación de una prueba de capacitación profesional objetiva, válida y fiable. Consideramos que sin este requisito, difícilmente se podrá determinar si los inscritos cuentan «con la debida habilitación y cualificación» para prestar este servicio tan importante para las garantías procesales.

De hecho, la superación de un examen es la condición que se exige para acceder a un registro de características similares existente en nuestro país, concretamente el de intérpretes y traductores jurados del Ministerio de Asuntos Exteriores (art. 7 del RD 2555/1977 de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, según modificación recogida en el RD 2002/2009 del 23 de diciembre), además de para acceder a los registros de traductores e intérpretes penales de todos los países de nuestro entorno.

En tercer lugar, creemos que un ligero retoque a la Disposición derogatoria única podría evitar posibles equívocos futuros en la interpretación de la ley. Si bien en su redacción actual deroga «cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en esta ley», pensamos que una mención expresa de la derogación de los artículos 398, 440, 441, 442 y 762.8 del Real Decreto del 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, eliminaría cualquier posible duda que podría surgir con motivo de la aplicación de la ley.

El cuarto aspecto que motiva la preocupación del sector representado por nuestras asociaciones se materializa en la Disposición final segunda del proyecto, según la cual las medidas previstas «no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal». Sorprende que una ley orgánica, de vocación presumiblemente duradera, pueda incluir una referencia de naturaleza presupuestaria tan puntual. Por otra parte, la disposición no indica cuáles son las dotaciones que no podrán ser objeto de incremento: ¿las vigentes en 2014, momento de redacción del proyecto? ¿las que se apliquen en 2015 cuando se supone que la ley orgánica se promulgará? Tampoco delimita el tiempo durante el que esta norma debería mantenerse. En este sentido, conviene recordar que el art. 441 de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal por el que se regula la interpretación judicial lleva vigente desde la promulgación de la ley el 14 de septiembre de 1882. Resulta impensable que tuvieran que pasar otros 132 años antes de que las administraciones públicas pudieran reforzar sus recursos.

Por todo ello, encontrándose abierto el plazo para presentar enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica mencionado, rogamos su apoyo para que se modifiquen los cuatro pormenores indicados, es decir:

- que en consonancia con el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/64/UE se especifique claramente que el requisito de inscripción en el registro oficial se aplique a los traductores e intérpretes que intervienen tanto en las diligencias policiales como en los procesos judiciales
- que se disponga que el acceso a los registros de traductores e intérpretes en los procesos penales sea exclusivamente mediante prueba objetiva, válida y fiable, por ser un procedimiento contrastado y consolidado;
- que se deroguen de forma expresa los artículos 398, 440, 441, 442 y 762.8 del Real Decreto del 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y
- que se elimine (del texto propuesto por el Ministerio de Justicia) la Disposición final segunda, por tratarse de un precepto presupuestario de difícil cabida en una ley orgánica.

Por último, nos ponemos a su entera disposición para ampliar lo aquí expuesto, bien por esta vía o de forma presencial si lo estimara conveniente. Red Vértice (<http://www.redvertice.org/p/sobre-la-red-vertice.html>) reúne a la práctica totalidad de las asociaciones de traductores e intérpretes en España y tanto en conjunto como individualmente tenemos una larga trayectoria de colaboración con la administración en el análisis y la prospectiva sobre la situación de intérpretes y traductores.

En espera de sus gratas noticias, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente,

Juan Miguel Ortega Herráez

Presidente de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ)

Margaret Clark

En representación de la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (ASETRAD)

José Luis Díez Lerma

Secretario de la Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (APTIC)

Graham Rhodes

Vocal de la Asociación Aragonesa de Traductores e Intérpretes (ASATI)

Anexo 5. Comunicado de Red Vértice el 23/10/13

En el marco de las acciones desplegadas por la Red Vértice con motivo de la transposición de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, hicimos llegar por diferentes vías al Ministerio de Justicia la propuesta recogida en la declaración de Barcelona del pasado 9 de junio de 2012. Como resultado, el Ministerio de Justicia decidió convocar a los representantes de algunas de las asociaciones integrantes de la Red Vértice (entre ellas APTIJ, Asetrad, AGPTI, APTIC, ASATI, AIPTI) para poder así escuchar nuestras inquietudes y propuestas y poder exponernos sus planes relativos a la creación de un registro de traductores e intérpretes judiciales. La creación de este registro no sólo responde a las exigencias de la Directiva Europea 2010/64/UE, que debería incorporarse al ordenamiento jurídico español antes del 27 de octubre de 2013, sino también a los planes del propio Ministerio de Justicia, que trabaja actualmente en un proyecto más amplio para regular algunas profesiones auxiliares de la Administración de Justicia, entre ellas la de traductor e intérprete judicial y mejorar así el servicio que se presta a los ciudadanos. Para ello, hasta la fecha, nos han consultado en dos ocasiones, el 27 de junio y el 11 de julio de 2013. El punto tratado en las dos reuniones fue la creación del registro de traductores e intérpretes judiciales y el acceso a él. A este respecto, abogamos por una prueba de certificación objetiva para el acceso a la profesión con las excepciones oportunas (traductores - intérpretes jurados) y la verificación de la competencia profesional. Otras posibilidades (mera verificación de titulación o acreditación profesional existente y experiencia, por ejemplo), si bien pueden ofrecer ventajas aparentes en un primer momento o en una fase transitoria hacia este nuevo modelo, se nos

antojan insuficientes y complejas en lo que a su gestión objetiva se refiere a medio y largo plazo. Y así lo hemos manifestado en los distintos encuentros. De ahí nuestra insistencia en la creación de un sistema riguroso de certificación profesional. Asimismo, hemos reiterado la necesidad de contar con formación continua específica, tanto en técnicas de interpretación como en deontología profesional y conocimientos básicos de derecho procesal. La gestión de los servicios de interpretación judicial debe ser directa, sin mercantiles intermediarias, para que jueces, secretarios judiciales, abogados y fiscales hagan uso del registro directamente. El registro profesional permitiría esa gestión directa. Todos los encuentros mantenidos se han caracterizado por su tono constructivo y por un continuo intercambio de ideas entre las dos partes. Esperamos que esto contribuya a una adecuada reglamentación del registro profesional y de la propia profesión. A fecha de hoy, si bien nos consta que el Ministerio de Justicia sigue trabajando en este proyecto, desconocemos si se han introducido nuestras sugerencias.

Juan Miguel Ortega Herráez

Presidente de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ)

Margaret Clark

En representación de la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (ASETRAD)

José Luis Díez Lerma

Presidente de la Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (APTIC)

Graham Rhodes

Presidente de la Asociación Aragonesa de Traductores e Intérpretes (ASATI)



AUTORITZACIÓ PER A LA DIFUSIÓ D'UN DOCUMENT ALS DIPÒSITS DIGITALS DE LA UAB I DEL CBUC

Nom, cognoms i DNI (o passaport) de l'autor/s:

Ana Vanessa Espada López

47655689B

Com a únic/s titular/s dels drets de propietat intel·lectual del document (títol):

TRADUCCIÓN JURADA Y JURÍDICA: La traducción en España en 2013: Un panorama multilingüe

Autoritzo/em la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per tal que aquest document estigui dipositat al *Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD)* o qualsevol altre dipòsit creat per la UAB o el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) amb la finalitat de facilitar la preservació i la difusió de la recerca i la investigació universitària.

Per tant, com a autor/s o titular/s dels drets -i, si és el cas, dels drets d'obres col·lectives- autoritzo/em a la UAB, a realitzar els actes que siguin necessaris per tal d'introduir el document als esmentats dipòsits, així com per preservar-lo i donar-hi accés mitjançant comunicació pública.

Aquestes institucions (UAB i CBUC) no estan obligades a reproduir els documents en els mateixos formats o resolucions en què seran dipositats originàriament. La cessió de l'exercici dels drets necessaris per tal de realitzar totes aquestes accions es fa amb caràcter de **no exclusivitat**, sense límit temporal ni territorial.

Declaro/em que no vulnero/em cap dret de tercers, ja sigui de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altre, en subscriure aquesta autorització, ni en relació al contingut d'aquest treball, de manera que exonero/em la UAB de qualsevol obligació o responsabilitat davant qualsevol acció legal que es pugui suscitar derivada del treball dipositat.

Finalment, accepto/em que des dels dipòsits es doni accés al document, **sempre que sigui possible segons les polítiques editorials**, mitjançant una llicència Creative Commons. Us recomanem:



Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.

O podeu escollir qualsevol d'aquestes altres:



Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original.



Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original.



Es permet la reproducció total o parcial, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, sempre que no sigui amb finalitats comercials i que es distribueixin sota la mateixa llicència que regula l'obra original. Cal que es reconegui l'autoria de l'obra original.



Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan aquestes es distribueixin sota la mateixa llicència que regula l'obra original i es reconegui l'autoria de l'obra original.



Es permet la reproducció total o parcial, la distribució i la comunicació pública de l'obra, sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.

Signatura de l'autor/s

Signatura del director/a

Ana Vanessa Espada López

Lloc i Data: **Barcelona, 13 de Juny 2015**

